

LA TRAGEDIA DE LO PRIVADO

EL POTENCIAL DE LO PÚBLICO



Hilary Wainwright

Publicado por la Internacional de Servicios Públicos y el Transnational Institute.



Public Services International
Internationale des Services Publics
Internacional de Servicios Públicos
Internationale der Öffentlichen Dienste
Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster
國際公務勞連



Transnational Institute

ÍNDICE

Prefacio	3
Introducción	4
Capítulo 1 - La Sudáfrica del postapartheid: prueba de cargo contra las políticas impulsadas por el mercado	10
Capítulo 2 - Alternativas a la privatización: pieza clave para el futuro	16
Capítulo 3 - Europa: cuando los artífices del Estado del bienestar intentan acabar con él	24
Capítulo 4 - Nuevas bases para una economía del beneficio público	34
Capítulo 5 - Construcción de coaliciones	38
Conclusión: caminos por recorrer	44

Prefacio

Es para mí un honor presentar este cuaderno a todos y todas las activistas sindicales que luchan por la justicia social. Nuestra estrecha colaboración con Hilary Wainwright le ha permitido conocer de primera mano algunas de las campañas más potentes en las que han participado sindicatos de los servicios públicos durante las últimas décadas.

Este cuaderno va dirigido a todos y todas las activistas que trabajan en el desarrollo de estrategias sindicales, la movilización de afiliados y afiliadas y la construcción de nuevas estructuras de poder, tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad. Los casos que Hilary repasa en estas páginas son solo una pequeña muestra del creciente número de dinámicas, innovadoras y apasionantes campañas en que están involucrados nuestros sindicatos.

Desde mi propia experiencia en Italia, puedo atestiguar el poder de las alianzas entre los sindicatos y las comunidades. También puedo testimoniar que, desde el punto de vista de la dirigencia sindical, esas alianzas exigen nuevas formas de pensar, nuevas formas de hablar y nuevas formas de organizarse y movilizarse.

Los sindicatos están legalmente obligados a negociar convenios colectivos con la patronal y a impedir que estos se quebranten. Esa es la base de la labor sindical. Sin embargo, como bien ilustra este cuaderno, los sindicatos de los servicios públicos que generan alianzas en sus comunidades se encuentran, en última instancia, en mejor disposición de defender los derechos e intereses de sus integrantes. Solo cuando se entiende que los derechos laborales son uno entre otros muchos derechos podemos empezar a comprender realmente que aunar fuerzas es un imperativo.



Dirigenta de la Internacional de Servicios Públicos Rosa Pavanelli: "Precisamos de nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de hablar, y nuevas maneras de movilizarnos."

Como secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras de servicios públicos de todo el mundo, me comprometo a ayudar a nuestros sindicatos a compartir sus ideas y experiencias, consolidar su fuerza en el lugar de trabajo y en la comunidad y proyectar el poder de las personas unidas en las instancias de toma de decisiones. A escala global, proyectaremos este poder en una serie de instituciones que no ven con buenos ojos nuestra participación ni comparten nuestra visión de la sociedad.

Somos conscientes de que, en la actual era de la globalización, debemos luchar colectivamente en todo momento para desarrollar unas sociedades que se basen en los principios de la justicia y la equidad, y se fundamenten en unos servicios públicos de calidad.

*En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria general, Internacional de Servicios Públicos*

Introducción

Este cuaderno trata sobre cómo los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos, junto con el resto de la ciudadanía y como parte de esta, no solo están defendiendo los servicios públicos, sino también luchando por hacerlos más democráticos y receptivos ante las necesidades y los deseos de las personas. También trata sobre cómo funcionan esas alianzas en distintos niveles: local, nacional e internacional.

Publicamos este cuaderno en un momento en que la privatización de las compañías y los servicios públicos es una vía que se ha intentado y ha fracasado. Las críticas a la privatización abundan y son generalizadas. Esta situación está llevando a que cada vez se tomen más decisiones, especialmente en el ámbito local, que apuntan a volver a situar los servicios públicos bajo control público.

El fracaso de las privatizaciones lo evidencian varios escándalos sonados. Desde la época de Margaret Thatcher, Gran Bretaña ha sido un campo de pruebas para la privatización y ha sido testigo de algunos de sus peores casos. Uno de los últimos fue el de la multinacional G4S, que prometió miles de puestos de trabajo para las Olimpiadas de Londres 2012 y estos nunca se materializaron. Y antes de eso estuvo Serco, una compañía que se construyó sobre la misma base de la privatización, a la que se sorprendió dejando sin personal suficiente el sistema de emergencias fuera del horario laboral habitual del Servicio Nacional de Salud (NHS) y que después admitió haber falsificado datos para ocultar este hecho. Y otro contratista de servicios informáticos, Atos, proporciona exámenes que se utilizan para declarar a personas con alguna discapacidad como ‘aptas para trabajar’ y, de este modo, propicia que se les retiren las prestaciones

sociales (y sigue haciéndolo a pesar de que algunas de estas personas han muerto a raíz de esta práctica).

Estas y muchas otras catástrofes cotidianas articulan nuestra referencia en el título a ‘la tragedia de lo privado’. Usamos esta expresión para poner de relieve lo fundamentalmente inadecuado que resulta aplicar la lógica del negocio privado, basado en maximizar las ganancias, a la gestión de recursos compartidos, tanto naturales como sociales, y a la satisfacción de necesidades sociales. El término da la vuelta a la expresión ‘la tragedia de los comunes’ (referido al patrimonio común), que es un ataque a la idea de que las personas, si disponen de condiciones adecuadas, pueden gestionar recursos comunes de forma eficaz y colectiva en pro de un beneficio compartido. La tragedia de todo aquello que se opone al patrimonio común –y de lo privado, en concreto– emana del supuesto de que las personas solo actúan en su interés propio e inmediato (en lugar de tener en cuenta los beneficios mutuos y las interdependencias) y que no se comunican –no hablemos ya de colaborar– en lo que se refiere a problemas compartidos.

‘El potencial de lo público’, en cambio, parte precisamente de esa conciencia de la interdependencia y de los principios de sostén, cuidado mutuo y colaboración que surge de ella. Todos estos elementos se ponen de manifiesto en las luchas para defender los servicios públicos que recogemos en este cuaderno. En algunos países y en algunos servicios, este potencial es evidente en la alta calidad de los servicios existentes, sobre todo en la sensibilidad de los trabajadores y las trabajadoras de primera línea ante las necesidades de las personas. Sin embargo, en ocasiones, las instituciones públicas han perdido la capacidad

de responder a las necesidades cambiantes de las personas por ser demasiado burocráticas y jerárquicas o incluso corruptas, de forma que la lucha para defender los servicios públicos entraña también generar la presión democrática necesaria para mejorarlos y reformarlos.

El problema radica en cómo –con qué tipos de organización– hacer realidad este potencial. El instinto que guía la redacción de este cuaderno nos dice que la respuesta está en la experimentación y en las lecciones que nos enseñan los intentos prácticos para crear soluciones.



Charles Hope

Desde la época de Margaret Thatcher, Inglaterra ha sido un laboratorio para la privatización.

El auge de la internalización



Al retornar su sistema de agua en manos públicas, la ciudad de París ha aumentado sus ingresos financieros así como la eficacia en la prestación de servicios a sus residentes.

Los gobiernos municipales de todo el mundo muestran una clara tendencia a recuperar el control de los servicios. En los Estados Unidos, por ejemplo, que tradicionalmente han sido el baluarte de la ideología promercado privado, se realizó un estudio que demuestra que el 20 por ciento de los servicios que se habían externalizado en algún momento se habían vuelto a gestionar de forma interna. Según ese mismo estudio, los principales motivos para 'internalizar' los servicios eran la incapacidad de los contratistas externos para mantener la calidad (73 por ciento) y que no se ahorraran costes (51 por ciento). En el ámbito nacional, el Gobierno del presidente Barack Obama también está estudiando la posibilidad de internalizar algunos servicios básicos. Obama, de hecho, declaró que, en muchos organismos del Gobierno, la externalización se había llevado demasiado lejos y había minado la capacidad de esos organismos para gestionar con eficacia a los contratistas privados.

En el Reino Unido, más de la mitad de los gobiernos locales encuesta-

dos en 2011 estaban recuperando los servicios que antes habían externalizado al sector privado. Entre las razones que se daban para ello se contaba, por ejemplo, garantizar que la calidad del servicio fuera la prioridad y lograr un mayor ahorro en eficiencia desde el punto de vista del valor público, así como que ese ahorro se volviera a invertir en la mejora del servicio en lugar de repartirlo en forma de dividendos entre los inversores privados o en forma de primas entre la directiva de la compañía.

En la Europa continental se observa la misma tendencia. En 2010, entes políticos y públicos tomaron la decisión de remunicipalizar el servicio de agua de París, la capital francesa. Con la gestión privada, se estaba desviando del presupuesto público demasiado dinero que se catalogaba como 'beneficio'. La remunicipalización ha supuesto un mayor control y supervisión por parte de la autoridad correspondiente y de representantes de los usuarios y las usuarias del agua, lo cual se ha traducido en una mejora de la calidad del agua y una bajada de

los precios.

En Alemania, se ha producido en los últimos años una importante expansión de la propiedad pública directa de compañías de servicios que antes dependían de un pequeño grupo de multinacionales que dominan el sector de la energía, el agua y los residuos. Ya en 2011, la mayoría de las redes de distribución de energía había recuperado la titularidad pública. Muchas autoridades públicas alemanas están volviendo a internalizar servicios como la eliminación de residuos, el transporte público, el agua, y la asistencia y la vivienda sociales, no solo con el fin de conseguir una mejor relación entre coste y resultado, sino también para cumplir con importantes objetivos sociales y ambientales. En otros países europeos, como Finlandia, los Países Bajos, Noruega y Bélgica, se evidencian tendencias parecidas. Y en Italia se organizó un referéndum en 2011 en el que el 96 por ciento de las personas votaron a favor de mantener el carácter público de los servicios de agua (ver el capítulo 3).

Un momento excepcional

Para quienes comparten los valores y la perspectiva de aquellos y aquellas que construyeron el Estado del bienestar como piedra angular de la reconstrucción después de la guerra en 1945 –con el objetivo de superar lo que William Beveridge, uno de los artífices del Estado del bienestar en Gran Bretaña pero que expresaba los valores de muchas otras personas en el resto del mundo, definía como ‘los males de la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la desocupación’–, estas tendencias que apuntan al regreso del suministro público de servicios básicos indica que nos encontramos en un momento de oportunidad excepcional.

Durante los últimos 30 años, desde que Margaret Thatcher y Ronald Reagan subieron al poder, los cinco males de los que hablaba Beveridge han vuelto a florecer mientras estos políticos, aferrados al dogma del mercado, dirigen la destrucción del Estado del bienestar (y, en el caso de gran parte del Sur Global, contribuyen a neutralizar todo intento por establecer servicios públicos allí donde más se necesitan).

Ahora está claro que los entes encargados de administrar los servicios públicos y los gobiernos locales, que son quienes toman las decisiones en la línea de frente de los servicios públicos, están en la práctica negando las pretensiones de las compañías pri-

vadas y sus adalides políticos. Con su actuación, están reivindicando desde el pragmatismo una lectura de la ‘eficiencia’ que se basa en una lógica distinta de la de la práctica comercial privada. Esta lectura se fundamenta en la idea de que el concepto de ‘valor público’ –la satisfacción de necesidades sociales– constituye el principal criterio de la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Este punto de inflexión nace de la experiencia cotidiana que atestigua el fracaso de los servicios prestados por el sector privado.

¿Cómo podemos fortalecer este abandono pragmático –y aún mo-

desto– de la privatización y desafiar a las instituciones nacionales e internacionales que siguen impulsando el proceso e imponiéndoselo a un público cada vez más descontento? ¿Y cómo puede este rechazo pragmático del mercado privado en el ámbito de los bienes públicos convertirse en una fuente de energía y creatividad, activando un proceso de mejora y ampliación de los servicios públicos para satisfacer las nuevas necesidades y deseos que han surgido en las últimas décadas? Estas son las preguntas que buscamos responder en este cuaderno.



Un inodoro en un municipio en África del Sur, donde 1,5 millón de personas siguen viviendo sin acceso a inodoros con cisterna.

Coaliciones para servicios públicos

Las fuerzas que han impulsado unos servicios públicos de calidad como respuesta a los desastres sociales de la privatización han sido muchas veces nuevos actores políticos; no personas concretas, sino coaliciones en las que quienes dependen de los servicios públicos para una calidad de vida digna, los usuarios y las usuarias, se alían con los trabajadores y las trabajadoras del servicio. En Uruguay, Brasil e Italia, por ejemplo, estas coaliciones formadas a escala nacional –y con apoyo internacional– han defendido con éxito la gestión pública del agua y han ayudado a mejorarla. En Noruega, el Reino Unido y Alemania,

coaliciones locales de trabajadores, administradores y usuarios de servicios públicos han puesto punto y final a privatizaciones y se han convertido en una fuente de innovación y renovación en la calidad del suministro del servicio.

Este cuaderno está concebido como una herramienta para resumir las lecciones que se pueden extraer de las experiencias de quienes han construido estas coaliciones, así como de quienes lo han intentado pero se enfrentan a dificultades de las que también debemos aprender. Nos hemos centrado particularmente en las lecciones para los trabajadores y las tra-

bajadoras de los servicios públicos y sus sindicatos, pero siempre teniendo muy presente la gran importancia de las coaliciones con las comunidades y el reto de ganarse el apoyo público, tanto nacional como internacional.

Una de las lecciones generales es que la resistencia debe desplegarse en muchos niveles: en el lugar de trabajo y en el municipio, en el ámbito nacional y en el espacio más opaco que ocupan organismos internacionales no elegidos y herméticos como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y, cada vez más, la Unión Europea.

El lugar de trabajo de servicios

concretos es donde se aplican efectivamente las decisiones tomadas en otros niveles y donde la resistencia firme y las alternativas convincentes de las personas directamente afectadas pueden bloquear la imposición de la privatización por parte de Gobiernos nacionales u organismos internacionales, y obligar a que se

dé marcha atrás en el proceso. En el ámbito nacional, el dogma del libre mercado de la clase política ha promovido los intentos de destruir las instituciones públicas y las coaliciones de resistencia han tenido que construir un fuerte poder contrahegemónico para poder alzarse con la victoria. Pero también es importante no

ignorar la importancia de organismos internacionales dominados por los Estados Unidos como instituciones a través de las que la ideología del libre mercado, especialmente encarnada en los Gobiernos de Reagan y Bush, ha impulsado, extendido y reforzado el proceso de privatización.



Berliner Energietisch organizó una iniciativa de referendo para remunicipalizar la red eléctrica y establecer una empresa de electricidad pública y democrática en Berlín, Alemania. Ver más en www.municipalservicesproject.org/blog

Entre bastidores

Esto ayuda a explicar por qué y cómo los partidos políticos neoliberales han podido destruir, en cuestión de una década, muchas instituciones públicas que se habían ido construyendo y consolidando en la vida nacional durante muchos años. En otras palabras, entre los bastidores de los órganos legislativos elegidos –que han ido degenerando paulatinamente en escenarios para la representación de rituales democráticos–, los Estados Unidos en particular han utilizado su poder en organismos internacionales para imponer la privatización como pieza del régimen normativo neoliberal a

escala global.

A veces, ese régimen normativo ha estado respaldado por la ley o, más bien, por tratados entre representantes gubernamentales –raramente debatidos, por no decir aprobados, por los debidos órganos legislativos nacionales– y, otras, se ha impuesto como requisito para la concesión de un crédito o en el contexto de amenazas de sanciones financieras directas o indirectas, desde la retirada de ayuda de los Estados Unidos a la huelga de inversiones de compañías estadounidenses. A menudo, también se ha reforzado con medios más su-

tiles, captando y presionando a personalidades políticas y a especialistas que, de lo contrario, mantendrían una postura crítica.

Sin embargo, el régimen normativo neoliberal también se ha cuestionado desde el momento en que, en la reunión que celebró la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1999 en Seattle, los Estados Unidos intentaron instaurar lo que se ha llamado ‘una constitución global’ basada en esta organización. De ahí surgió el movimiento ‘altermundialista’: un movimiento con presencia local, nacional y global y que, en muchos sen-

tidos, ayudó a difundir, en todos los niveles, la convicción colectiva de que existen alternativas y, por lo tanto, no hay nada de natural en las supuestas limitaciones incuestionables del mercado global. El reto ahora consiste en construir, a partir de las lecciones aprendidas y de las victorias locales y nacionales, un régimen normativo radicalmente distinto que proteja los servicios públicos y facilite una reforma basada en la democracia.

Este cuaderno empieza con un capítulo sobre Sudáfrica por varios motivos. En primer lugar, la situación de los servicios públicos casi 20 años después del fin del apartheid representa una prueba de cargo especialmente flagrante del fracaso de las políticas económicas neoliberales y de la trágica falsedad de las promesas que

auguraban que la prosperidad económica se filtraría con 'un efecto goteo' y mejoraría la vida de la mayoría de la población.

En segundo lugar, la lucha por dismantelar los servicios públicos de la era del apartheid y sustituirlos por servicios democráticos y de acceso universal nos ofrece un ejemplo especialmente elocuente del desafío que entraña defender los servicios públicos con políticas prácticas de mejora a través de la democratización.

Después del apartheid, estaba claro que el orden establecido no era una opción. Uno de los argumentos de este cuaderno es que raramente es así. Los sindicatos del sector público se enfrentan a este desafío a menudo, pero las dificultades y las derrotas que experimentaron en Sudáfrica apuntan

al tercer motivo por el que el caso de este país es paradigmático, y es que ilustra la importancia de permanecer alerta ante los distintos niveles en los que opera la ofensiva privatizadora y las vulnerabilidades de la resistencia si esta no puede alterar el equilibrio de fuerzas en todos los niveles.

Las presiones internacionales sobre la Sudáfrica del postapartheid para que no rompiera con el régimen neoliberal global fueron decisivas, aunque actuaran con total opacidad. Las fuerzas para la reconstrucción democrática de la sociedad, a pesar de ser considerables, no estaban del todo preparadas para este escenario y resultaron ser vulnerables frente a las intervenciones de Washington.



Sindicatos y movimientos ambientalistas impugnaron los intentos de los Estados Unidos a crear un régimen regulador neoliberal global a través de la OMC en Seattle en 1999, y continúan a hacerlo siempre cuando se negocien acuerdos comerciales injustos hoy en día.

Vínculos con las comunidades

El punto de partida de las experiencias que recogemos en estas páginas para la transformación democrática y la mejora de los servicios públicos es el conocimiento y la creatividad de los trabajadores y las trabajadoras del servicio y de aquellas personas que lo usan. Ese conocimiento suele ser parte del compromiso de los trabajadores y las trabajadoras del servicio público con su labor y con la satisfacción de quienes lo usan (este grupo incluye, por supuesto, a los propios trabajadores y trabajadoras, y sus familias y amistades).

La forma de utilizar este conocimiento y creatividad pasa por fortalecer la democracia, y es precisamente por este motivo por el que el proceso de democratización es esencial para la eficiencia de lo público. Podríamos llamarlo 'democracia productiva'. El objetivo de las formas participativas de democracia que presentamos en este cuaderno consiste, en la práctica, en crear fuentes de poder que explotan las vulnerabilidades de las fuerzas que impulsan la mercantilización (por ejemplo, la lejanía que existe entre la clase política y la vida cotidiana, las necesidades y las inquietudes de la población) y, al mismo tiempo, movilizar positivamente las capacidades de trabajadores y trabajadoras y comunidades para transformar los servicios públicos para el beneficio común.

En lo que respecta a construir este tipo de democracia productiva intentando crear coaliciones con usuarios y usuarias del servicio, este cuaderno explica cómo los sindicatos han desplegado sus recursos para establecer vínculos efectivos con las comunidades. Uno de los ejemplos que examinamos es el de la sección del metro de Ciudad del Cabo del sindicato SAMWU, que creó una red de delegados y delegadas para conectar con grupos comunitarios en el lugar donde viven. Para trabajar así, el sindicato parte de reconocer que, por lo general, la comunidad ya está actuando sobre un problema concreto antes de que el sindicato siquiera lo identifique. De este modo, hacer campaña no consiste en aterrizar de la nada y asumir todo el protagonismo, sino en establecer vínculos, forjar alianzas y encontrar formas de trabajar colecti-

vamente, combinando distintas fuentes de poder.

La otra cara de la transformación basada en la democracia implica construir esa democracia en el funcionamiento interno del sector público. Este cuaderno explora varias experiencias de este tipo, como la de la sección de UNISON en la ciudad inglesa de Newcastle y el proyecto Municipio Modelo en Noruega.

En el caso de Newcastle, se trató de un proceso de transformación del servicio público en que la sección local del sindicato consiguió acabar con la externalización del servicio informático y, después, negoció con la dirección que se adoptara una alternativa interna. El proceso dio la vuelta a la habitual jerarquía vertical del sector público e involucró realmente a la plantilla y a la ciudadanía para encontrar opciones que permitieran mejorar el servicio informático del gobierno municipal, así como ahorrar costes y redirigirlos a otros servicios de primera línea como la atención a personas mayores y los programas para jóvenes.

En Noruega se vivió un proceso parecido, aunque más formalizado. A los trabajadores y las trabajadoras del sector público se los sentó al volante y se les dio la oportunidad de hacer los cambios que desearan en los servicios. El proceso supuso elaborar lo que llamaron 'guías para el cambio', permisos especiales para poder trabajar en el diseño de nuevos métodos con que mejorar los servicios y presentar propuestas 'desde abajo' ante un grupo de gerentes, responsables políticos y representantes de los trabajadores y las trabajadoras que podrían ponerlos en práctica.

Por último, este cuaderno analiza la importancia de la cooperación internacional. Las campañas contra la privatización del agua ilustran lo importante que es la investigación y el control y seguimiento activo y colectivo de lo que están haciendo las multinacionales a escala mundial. Estas grandes corporaciones se coordinan y planifican con una dimensión internacional; nuestras resistencias y alternativas deben tener el mismo alcance global.

A partir de las exitosas luchas

transnacionales contra la privatización del agua ha surgido la innovadora idea de los partenariados público-públicos o público-civiles: espacios en los que organizaciones públicas y civiles que gestionan servicios públicos colaboran entre sí, más allá de cualquier frontera, para compartir conocimientos, buscar financiación y, en general, reforzar el poder de las instituciones públicas y civiles para administrar compañías y servicios públicos. Este modelo de colaboración pública-pública o pública-civil se está convirtiendo en una herramienta institucional cada vez más importante en la lucha contra la privatización y a favor de una gestión pública de calidad. (Este punto se debate con mayor detalle en la conclusión.)

Todos los casos que se presentan en este cuaderno ilustran las capacidades creativas que se desarrollan mediante la cooperación y la solidaridad, independientemente de los mercados y del sistema político. También nos ofrecen una prueba empírica de que existen alternativas a la economía neoliberal que, además de ser causa de desesperanza y residuos, está destruyendo la democracia en todo el mundo. Y esas alternativas se están construyendo en estos momentos.

Este cuaderno es parte de un proceso dinámico: un documento de trabajo en el que desearíamos ir incorporando las aportaciones de quienes lo leáis.

Si deseáis hacernos llegar más ejemplos de vuestras propias experiencias y enviarnos vuestra opinión sobre este cuaderno, podéis escribirnos un mensaje a: communications@world-psi.org

Capítulo 1

La Sudáfrica del postapartheid: prueba de cargo contra las políticas impulsadas por el mercado

“Sabíamos que el apartheid era un sistema con raíces muy profundas, sabíamos que sería difícil, sabíamos que se necesitaría tiempo, pero no pensamos que nos llevaría una eternidad. Dieciocho años. Dieciocho años y aún estamos viviendo así.”

Para Lennox Bonile, este ‘así’ es un estrecho salón, una habitación y una cocina en un armario en el barrio de Khayelitsha de Ciudad del Cabo, con un cubo en lugar de un inodoro y sin agua corriente.

Lennox es representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de Sudáfrica (SAMWU) en el gobierno municipal local. Él y su mujer, Priscilla, han pasado de tener un sistema de cubo para el inodoro a un sistema de ‘cubo avanzado’. Esto significa que tienen un ‘inodoro portátil’ en el que vaciar el cubo y ese inodoro se vacía cada semana. (De esta tarea se encargan empleados eventuales que trabajan para un intermediario laboral contratado por el gobierno de la ciudad.)

Dieciocho años después de que la gran masa de población negra de Sudáfrica llenara las calles para votar por el primer Gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA), aún hay 1,5 millones de personas (la mayoría negras o de color) que viven sin un inodoro con cisterna. Hay también



Trabajadores y trabajadoras municipales recogen y vacían cubos de inodoros en el municipio de Ezeneleni en la ciudad de Warden en la provincia de Eastern Free State.

1,7 millones de personas que viven en barracas, sin un lugar adecuado para dormir, cocinar o asearse.

Si bien la brecha entre las personas blancas y negras se ha reducido ligeramente porque una minoría de estas últimas ha subido unos peldaños en la escala de ingresos, el abismo entre ricos y pobres se ha profundizado (y la mayoría de las personas pobres son negras). Sudáfrica, según datos publicados por el Banco Mundial en julio de 2012, sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo.

Las estadísticas son inquietantes. El 20 por ciento más pobre de Sudáfrica recibe menos del 3 por

ciento de la renta total, mientras que el 10 por ciento más rico acapara más del 50 por ciento. Esta diferencia es más marcada que la registrada en México o Brasil, e incluso entre la clase más humilde y la oligarquía en Rusia.

Casi una tercera parte de la población sudafricana vive con menos de 2 dólares al día y el nivel de desnutrición infantil, como el de desempleo, es en estos momentos más alto que durante el apartheid.

Promesas incumplidas

“¡Habrán viviendas, seguridad y comodidad! ¡Habrán empleo y seguridad! ¡El pueblo compartirá las riquezas del país!” Estas eran las promesas de la Carta de la Libertad, el documento que inspiró y unificó la lucha contra el apartheid (y que fue citado como prueba de la acusación en el juicio por traición que llevó a Nelson Mandela a la cárcel). Pero dos décadas después de la liberación de Mandela, estas promesas no se han hecho realidad. “Es inquietante, una ofensa a nuestra dignidad y respeto”, explica Lennox Bonile, frunciendo el ceño al reflexionar sobre el por qué de sus circunstancias y las de otros millones de personas como él.

La inmensa injusticia que se suponía que se había superado con el fin del apartheid, así como las extremas repercusiones sociales del mercado que abrió y facilitó –en lugar de regular y limitar– un Estado basado en un gobierno de mayoría, han hecho de Sudáfrica una prueba de cargo especialmente flagrante contra las políticas impulsadas por el mercado, que se han convertido en la ortodoxia de los poderes económicos dominantes y, por lo tanto, del régimen normativo aplicado por las instituciones económicas internacionales dominadas por los Estados Unidos.

No hay ningún lugar del mundo donde los servicios públicos –desde los sistemas nacionales de agua o transporte a la oficina local de

correos– no se hayan visto amenazados por la privatización, se hayan fragmentado en varias divisiones y vendido o se hayan convertido en un partenariado público-privado regido por una mentalidad empresarial a consecuencia de las políticas económicas impulsadas por los intereses comerciales y no por las necesidades públicas.

En estos procesos, los trabajadores y las trabajadoras del servicio público se catalogan como ‘un coste’ que se debe recortar. Al abrir los servicios públicos a compañías con ánimo de lucro, los gobiernos han bloqueado el recurso necesario para la mejora y el cambio en el sector público: el conocimiento y el compromiso ético de quienes proporcionan y utilizan los servicios públicos.

La ortodoxia del libre mercado fue propugnada originalmente por dirigentes de la derecha evangélica como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero se extendió rápidamente por todo el espectro político, incluso –en demasiados casos– los partidos laboristas, que al aceptar el régimen promercado global volvieron la espalda a sus propias bases: los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos –y quienes los usan– cuyos conocimientos y compromiso –con el debido apoyo y liderazgo político– podrían haber impulsado una mejora y cambio democráticos, sobre todo teniendo en cuenta que las encuestas

de opinión en Europa indican que la mayoría de la población prefiere que los servicios públicos se sigan prestando desde el sector público. A pesar de la disposición de la mayoría de los sindicatos de servicios públicos del país a desempeñar este papel positivo, Sudáfrica no fue ninguna excepción.

El Gobierno del CNA optó por la mercantilización y la privatización como principal vehículo para reconfigurar el Estado del apartheid, codificado en el programa diseñado por el Gobierno en 1996, la estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR). A pesar de su nombre, la estrategia GEAR hizo explícito el compromiso del Gobierno del CNA con el sector privado como motor del crecimiento económico, la apertura de los mercados de capital, la reducción del gasto estatal y la adopción de la privatización.

El Gobierno anunció la GEAR como algo ‘no negociable’ después de que se produjeran una serie de movimientos especulativos contra el rand, la divisa del país, en los primeros meses de 1996. Con ella, se sustituyó de hecho el conocido como Programa de Reconstrucción y Desarrollo, un marco para la transformación más democrático y popular, ya que se había elaborado con la participación de trabajadores y trabajadoras y comunidades.

La alternativa democrática

Este proceso se desplegó en todo el mundo. En Sudáfrica, el CNA recibió con los brazos abiertos a Bewater, Suez y otras compañías multinacionales para que se lucraran con el agua, la tierra, los minerales y otros bienes comunes, y para gestionar los servicios públicos basándose en los principios del sector privado. En la misma línea, encontramos partidos laboristas en todos los continentes que han buscado en el mercado privado el medio principal para ‘reformular’ los servicios públicos.

Pero la cuestión no terminó aquí. Trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de todo el mundo,

organizados en tanto que ciudadanos y junto con el resto de la ciudadanía, se han negado a renunciar a las conquistas conseguidas hasta la fecha y a abandonar la lucha por los derechos sociales y económicos. Como sindicalistas, y en alianza con las comunidades, son quienes están asumiendo la responsabilidad colectiva por la calidad de unos servicios públicos que en su día pusieron en manos de los partidos políticos. Su modelo de ‘reforma de los servicios públicos’ no persigue el lucro, sino que está pensada por y para las personas.

Sin embargo, son raras las ocasiones en que estas luchas de base atraen

la atención pública o encuentran una voz política. El objetivo de este cuaderno, por lo tanto, es poner de relieve varios casos en los que sindicatos de los servicios públicos, colaborando con movimientos de las personas que los usan, han hecho campaña para defender esos servicios y para garantizar que estos tengan la mayor calidad posible. Al mismo tiempo, esa lucha también significa que los trabajadores y las trabajadoras lidian por los derechos, la seguridad, las herramientas y los recursos que necesitan para servir realmente a las personas.

La resistencia

Lennox Bonile es uno de los centenares de representantes sindicales que está haciendo campaña, junto con otros grupos comunitarios, con el fin de construir en el gobierno local la capacidad para proporcionar los servicios que, por su propia experiencia diaria en Khayelitsha, sabe muy bien que se necesitan urgentemente.

Los trabajadores y las trabajadoras del gobierno municipal como Bonile han sido testigo de cómo se minan las posibilidades de construir servicios públicos de calidad con la precarización del trabajo en el sector, en parte provocada por la adopción de la figura de los intermediarios laborales y por programas basados en el trabajo temporal, como el Programa

de Ampliación de las Obras Públicas (EPWP). Este programa crea empleos temporales para desarrollar actividades ambientales en las comunidades. “Consigues trabajo durante unos meses, después se acaba y ya no te dan más”, comenta. “El salario está en la línea de la pobreza y trabajan en condiciones terribles, sin ropa de seguridad, ni siquiera cuando trabajan en el alcantarillado.”

La labor de Bonile consiste en explicar los argumentos del SAMWU a las organizaciones locales de Khayelitsha. El resultado es una eficaz combinación del impacto moral y mediático de las protestas comunitarias –muchas comunidades se encuentran en una disposición casi permanente a

protestar– y de negociación sindical.

Esas mismas raíces entre los usuarios empobrecidos de los servicios han sido de vital importancia en la lucha que ha liderado sobre el terreno el SAMWU contra la corrupción y por la responsabilidad política. “Las comunidades acuden a nosotros. No confían en ninguna otra voz”, explica Jacob Modimoeng, secretario provincial del SAMWU. Al cabo de una semana se dirigía ante una protesta de 4.000 personas en Katone, donde el alcalde conduce el último modelo de Mercedes Benz mientras que los trabajadores y las trabajadoras municipales carecen de transporte para llegar a las comunidades a las que intentan servir.



Altos niveles de movilización sindical y comunitaria apuntan a poner fin a la corrupción cuando África del Sur ofrece sus servicios públicos a toda empresa que desea comprarlos.

El SAMWU actúa contra la corrupción

Katone es un pequeño municipio cerca de la ciudad de Rustenburg, en la rica zona minera de Sudáfrica. Marikana, el escenario de la matanza de 34 mineros en huelga asesinados por la policía en 2012, está muy cerca.

Muchas personas de Sudáfrica afirman que Marikana fue una se-

ñal de alarma. En todo el mundo, son cada vez más quienes vieron a Mandela salir de la cárcel, imaginando que el sufrimiento de la gran mayoría de la población sudafricana negra pronto terminaría, y empiezan a plantear dudas. La brecha entre los 4.000 rand al mes que cobra la perso-

na que opera una perforadora de platino y los 45 millones de rand al año que se embolsan quienes administran las minas es uno de los hechos explosivos que ha impulsado las crecientes reivindicaciones salariales –incluso en otros sindicatos como el SAMWU–, exigiendo que el salario mínimo se

fijara en 12.500 rand al mes.

La organización provincial del SAMWU en el noroeste del país está dirigiendo una lucha paralela de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y comunidades locales, muchos de los cuales trabajan en las minas de platino o tienen allí a familiares o amigos. El objetivo es reivindicar sus derechos en lo que se refiere al dinero público para servicios básicos.

Rustenburg es uno de los municipios más ricos en la provincia del Noroeste. La ciudad recibe unos ingresos considerables por el agua a granel y la electricidad de las que dependen las minas. Si Rustenburg estuviera cumpliendo con sus responsabilidades municipales, con estos ingresos de las compañías mineras deberían pagar el agua, la electricidad, el saneamiento y las carreteras en Marikana, Katone y los pequeños asentamientos de alrededor. En la realidad, los y las habitantes de estas zonas viven sin carreteras adecuadas, con agujeros en el suelo en lugar del debido saneamiento y con un servicio eléctrico tan esporádico que parece más una anécdota que un derecho cotidiano.

Algunas de las causas de esta situación se hicieron evidentes para los y las integrantes del SAMWU, muchos de los cuales vivían en estas zonas empobrecidas o intentaban servir en ellas. “Los y las camaradas del sindicato no dejaban de venir a la oficina con los mismos problemas”, recuerda Jacob Modimoeng. “La sensación de que los recursos de la comunidad se estaban malversando iba en aumento. El dinero municipal no se estaba invirtiendo en lo necesario.”

Las dificultades a las que debía hacer frente el sindicato para actuar a partir de esta información pronto quedaron claras, cuando los delegados y las delegadas sindicales se vieron amenazados. Jacob explica cómo “se convirtieron en objetivo. Nos dijeron que recibían amenazas de muerte; también contra sus familias. De repente, se veían rodeados por caras desconocidas. La vida se puso muy difícil”. A algunas de estas personas, por otro lado, se les ofrecieron sobornos. “El alcalde, Matthew Wolmarans, se les acercó y les dijo ‘os daré un millón’”, explica Jacob, “pero nuestros



Las protestas sindicales contra peajes en Africa del Sur, incluida una huelga general de un día entero, forzaron a los ministros a eliminar los peajes locales.

y nuestras camaradas estaban entregados a la revolución”.

La gravedad de los intentos por hacer callar a cualquier persona que osara denunciar situaciones irregulares quedó clara cuando Moss Phakoe, consejero del CNA y sindicalista activo fue abatido a tiros cuando salía de su casa para trabajar el 9 de marzo de 2009, dos días después de que entregara un expediente sobre corrupción que implicaba al alcalde Wolmarans y a uno de sus socios empresariales.

Fue solo en julio de 2012, tras una larga lucha para que se hiciera justicia, cuando Wolmarans fue sentenciado a una pena de prisión de 20 años por ser el autor intelectual del asesinato de Phakoe (aunque posteriormente se le concedió la posibilidad de apelar).

Esta es solo una historia entre tantas. Sin embargo, ejemplifica muy bien la naturaleza endémica de la corrupción: resultado de la tendencia a la concesión de servicios públicos por concurso y de hasta qué punto se abusa de los cargos públicos para perseguir el lucro personal. Al mismo tiempo, no obstante, la campaña para llevar a juicio a los asesinos de Moss Phakoe atestigua la determinación, la solidaridad y la capacidad de organización de los ciudadanos y las ciuda-

danas para reivindicar los derechos democráticos y sociales que creían que habían conquistado tras la caída del apartheid.

El SAMWU considera que la corrupción no es ‘un tema aislado’, sino que la entiende, más bien, como resultado directo de haber permitido que el afán de lucro fuera el factor dominante en los servicios públicos. Esa situación evidencia la esencia corrupta de la política neoliberal y podría permitir a quienes abogan realmente por unos servicios públicos por y para las personas allanar el camino para construir un suministro público democrático.

Una alternativa democrática a la privatización del agua

Pasemos ahora a otra de las campañas en las que ha participado de forma muy activa el SAMWU. Para solucionar los problemas y aprovechar las oportunidades que planteaba el desmantelamiento del Estado sudafricano del apartheid, el SAMWU movilizó las habilidades y el compromiso de sus integrantes para desarrollar una capacidad pública, impulsada por la democracia, para reestructurar los servicios públicos sin recurrir a la privatización y con el fin de cubrir las necesidades de todos y todas. Al mismo tiempo, tuvo que hacer frente a la campaña de privatización del Gobierno. También otros sindicatos de la federación COSATU siguieron esta misma estrategia de lo que podríamos llamar ‘resistencia transformadora’.

La estrategia postapartheid del SAMWU consistía en seguir una doble vía: por un lado, “detener la privatización de los servicios municipales (en todas sus formas)” y, por el otro, “contribuir a la transformación de los servicios municipales para posibilitar un suministro de servicios eficaz, responsable y equitativo”.

En otras palabras, el sindicato se comprometió con un proceso de reestructuración con el objetivo de demostrar que el sector público tenía la capacidad de reorganizar los servicios estatales sobre la base de los derechos sociales consagrados en la constitución democrática de Sudáfrica. A esta

iniciativa se sumaron también otros sindicatos, especialmente el sindicato del transporte SATAWU, que se enfrentaba a la privatización de los ferrocarriles y los puertos.

En 1997, tras una campaña nacional de manifestaciones y un intenso debate público, el SAMWU alcanzó un acuerdo con la Asociación de Gobiernos Locales de Sudáfrica (SALGA) sobre un protocolo para definir la vía de la reestructuración de los servicios. El compromiso clave, en lo que concernía a los sindicatos, era que el sector público sería siempre la opción de preferencia.

El sindicato, a pesar de reconocer que era insuficiente que el sector público se definiera simplemente como ‘la opción de preferencia’, sacó el mayor partido posible del espacio que ofrecía este acuerdo jurídico para que trabajadores y trabajadoras y gerentes desarrollaran alternativas con posibilidades de ponerse en práctica. Los y las camaradas del sindicato, en todos los niveles, comenzaron a trazar planes, grandes y pequeños, para la reconstrucción pública: desde arreglar las cañerías de agua de sus propias comunidades en su tiempo libre a colaborar con gerentes municipales para superar el legado institucional del apartheid.

Una de las iniciativas ejemplares se desarrolló durante dos años, a partir de 1996, en la zona de Hillstar, en Ciudad del Cabo, formada por tres

municipios. Estos tres municipios tenían departamentos de agua separados y, debido a las desigualdades en el suministro de servicios durante el apartheid, el agua en estos municipios, reservados solo a población negra, no estaba canalizada hasta las casas, sino que se tenía que ir a buscar a una fuente, una tarea que normalmente dependía de las mujeres, que debían caminar más de 20 kilómetros.

El sindicato reunió a personal y gerentes de los tres municipios para unificar los fragmentados departamentos de agua e igualar el servicio, con el objetivo último de instalar agua corriente en todos los hogares. Tanto la administración como los sindicatos estaban convencidos de que la mejor forma de alcanzar la integración pasaba por movilizar las capacidades públicas y comunitarias. El conocimiento de la comunidad en lo que se refería a la ubicación de las cañerías y las válvulas, por ejemplo, era fundamental para el proceso de reparación y modernización. Alf Moll, el ingeniero encargado de la iniciativa, recuerda: “Uno de los objetivos de las reuniones de Hillstar era demostrar que contábamos con capacidad interna para garantizar el suministro del servicio”. Lance Veotte, el principal representante del SAMWU en el proceso añade: “Pensábamos que una vez lográramos una buena integración pública de la administración municipal, no habría vuelta atrás. Era una forma de evitar la externalización; todos creíamos que la externalización perpetuaría las divisiones y las desigualdades”.

La convicción del SAMWU tuvo que superar una importante prueba durante el proceso de Hillstar, cuando el gobierno municipal de Ciudad del Cabo contrató a una consultora con el encargo de estudiar distintas opciones para la gestión del suministro de agua. La consultoría estaba financiada por una subvención del Gobierno destinada a proyectos piloto de partenariados público-privados. Gracias a la presión de los sindicatos y los departamentos de agua, el gobierno de la ciudad aceptó que el estudio incluyera todas las opciones posibles. Finalmente, la consultora recomendó que el gobierno siguiera gestionan-



Una buena organización sindical de las y los trabajadores de los servicios públicos constituye a menudo un fuerte antídoto a la corrupción a nivel de la dirección.

do de forma interna los servicios de agua.

El resultado de todo ello fue una auténtica mejora en las infraestructuras, de modo que, un año después, todos los hogares contaban con agua corriente y las familias más pobres estaban recibiendo los 50 litros de agua gratuita por persona y por día que el CNA había prometido originalmente en el Programa de Reconstrucción y Desarrollo de 1994. Graham Reid, superintendente de la distribución de agua en Ciudad del Cabo, comenta: “En un primer momento, al gobierno de la ciudad se le ocurrió la idea de privatizar porque veía que los servicios de agua de la zona eran un desastre. Después iniciamos el proceso de Hillstar y, debido a su éxito sobre el terreno, la idea de la privatización se aparcó. Se dieron cuenta de que era posible suministrar los servicios internamente”. La consultora añadía en su informe, no obstante, que si se debían aportar más fondos, en el largo plazo se debería de estudiar la posibilidad de la privatización.

¿Por qué no fue posible generalizar la experiencia de Hillstar? En ella habían confluído varios elementos clave: el compromiso del sindicato y de los y las gerentes de primera línea, las capacidades internas, la participación activa de la comunidad y las soluciones constructivas de los sindicatos. Sin duda, el SAMWU, entre otros actores, intentó utilizar la experiencia como un modelo para otras iniciativas de reconstrucción de los servicios de agua, además de convertirla en una lección clave de su programa educativo para delegados y delegadas sindicales. No obstante, las principales iniciativas de procesos de reconstrucción liderados por sindicatos y comunidades se toparon con el contexto político más general, en que el partido político que había encabezado la lucha contra el apartheid se había convertido en el mismo partido político que estaba impulsando la privatización.

En primer lugar, y como ya había dejado entrever el informe de la consultora en Ciudad del Cabo, llegó el problema de la financiación. En el marco neoliberal de su plan macroeconómico, a partir de 1994 el Gobierno del CNA comenzó a imponer duras restricciones sobre los

fondos de los municipios, privando a estos ya desde un principio de los recursos que necesitaban para ampliar y reestructurar los servicios y poder satisfacer las necesidades de las desatendidas comunidades negras. Tomemos el caso de Johannesburgo. Entre 1991 y 1999, el departamento de finanzas había recortado las subvenciones centrales y locales en un 85 por ciento (descontada la inflación). Sobre el terreno, los municipios sometidos a este tipo de presión financiera recurrieron a la privatización.

Además, en 1996, como si se tratara de consolidar y generalizar esta privatización circunstancial, el Ministerio de Gobierno Local anunció el Marco de Inversiones en Infraestructuras Municipales (MIIF), preparado según las recomendaciones del Banco Mundial. Al principio, el SAMWU se opuso a esta tendencia caso por caso, apostando por el modelo Hillstar a través de sus distintas secciones y con el pleno apoyo del sindicato a escala nacional. Pero con el MIIF, el SAMWU se enfrentaba a un desafío aún mayor. “Uno de los elementos clave del MIIF eran sus propuestas para establecer partenariados público-privados, por lo que tuvimos que abordar la cuestión de la privatización de forma sistemática”, recuerda Roger Ronnie, el secretario general del SAMWU en aquel período.

Otro problema era que los sindicatos se encontraban prácticamente solos frente a multinacionales con numerosos medios, como Bewater y Suez. El Gobierno del CNA no solo estableció un marco fiscal que hacía a los gobiernos locales muy vulnerables frente a la presión de estas multinacionales, sino que también dirigió toda la ayuda al desarrollo hacia estas compañías privadas. Así lo evidencian las actividades de la Unidad de Inversiones en Infraestructuras Municipales y del Banco de Desarrollo del África Meridional.

Lance Veotte, el delegado del SAMWU que fue la fuente de inspiración de las iniciativas para desarrollar alternativas en la gestión y el suministro de agua, resume las asimetrías que se han ido consolidando en estas instituciones: “En lugar de capacitar a los municipios para que mejoren la prestación de servicios, estos organismos



Stephanie Hayes de la Escuela Primaria de Ashe reacciona a la conclusión exitosa de la huelga del magisterio en Septiembre del 2012.

están decididos a asegurar la participación del sector privado en servicios básicos como el agua, el saneamiento y la eliminación de residuos”. Los intentos para desarrollar el modelo de Hillstar pusieron de manifiesto que el SAMWU no podría llevar adelante los planes de reconstrucción en solitario, frente a las fuerzas de multinacionales del agua como Bewater, el Gobierno y equipos de consultoras formados en los Estados Unidos o el Banco Mundial.

En el próximo capítulo, veremos cómo han afrontado –y han empezado a superar– algunos de estos obstáculos estructurales las luchas del agua en Brasil, Uruguay e Italia.

Alternativas a la privatización: pieza clave para el futuro

En este capítulo se examinan tres grandes luchas para defender el agua como un bien público y para mejorar la calidad de su suministro. El agua es un caso emblemático de la dependencia colectiva de un recurso compartido, de una parte del patrimonio común. En la lucha contra las constantes ofensivas concertadas para privatizarla, los trabajadores y las trabajadoras del sector, junto con la ciudadanía, han demostrado que los sindicatos pueden ser salvaguardia del patri-

monio común, en colaboración con quienes la usan y tienen interés en su gestión sostenible. Pero todas las victorias en una economía que sigue estando dominada por el incansable y depredador mercado capitalista son precarias. En todos los casos que recogemos en estas páginas, la lucha contra la privatización y la comercialización de los servicios públicos continúa. Por ese motivo, al final de cada historia se presentan algunas de las lecciones aprendidas de cara al futuro.

1. Brasil: plena movilización a favor del agua pública

En Brasil, la historia de la resistencia transformadora de los trabajadores y trabajadoras frente a la privatización empieza en 1996, con el intento del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) de exigir a los gobiernos estatales que vendieran su compañía pública de agua y saneamiento y trasladaran la responsabilidad de la gestión del nivel municipal al regional.

Esta propuesta formaba parte de un proceso más general de reorganización de las compañías públicas de agua para hacerlas más atractivas a la inversión privada. El traspaso de la responsabilidad al nivel regional habría supuesto la ruptura de numerosas compañías públicas bien establecidas en muchos municipios, donde la izquierda política era relativamente fuerte. A partir de mediados de la década de 1990, estas propuestas ya se habían traducido en despidos en masa, pero las resistencias, hasta el momento, se habían limitado a luchas aisladas dirigidas por grupos de trabajadores y trabajadoras.

Cuando se aceleraron los preparativos para privatizar las compañías públicas, “los trabajadores y las trabajadoras empezaron a afrontar ‘la guerra’ más políticamente”, explica Abelardo de Oliveira Filho, en aquel entonces secretario de Saneamiento y Ambiente de la Federação Nacional

dos Urbanitários (FNU), afiliada a la mayor unión de sindicatos del país, la Central Única dos Trabalhadores (CUT). De Oliveira Filho añade: “Se hizo necesario extender la lucha más allá de los sindicatos y conseguir que toda la sociedad tomara conciencia de lo importante que era defender estos servicios básicos; en otras palabras, de convertirse en el sindicato de la ciudadanía”.

Una alianza poderosa

Esta lectura de la situación llevó al sindicato a ponerse en contacto con todos aquellos grupos que compartirían un compromiso con la gestión pública del agua y el saneamiento como un bien público y un derecho humano fundamental. El resultado de ello fue la creación del Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental en 1997. El Frente, fundado por 17 organizaciones, era una poderosa alianza formada por grupos de consumo, ONG que trabajaban sobre la reforma urbana, administradores y administradoras públicos, grupos confesionales y movimientos sociales.

En este contexto, la participación de la ASSEMAE, la Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, fue especialmente importante. La ASSEMAE desempeñó un papel clave tanto en lo que se re-

fiere a los argumentos técnicos contra las pretensiones del Gobierno como a los planes –junto con los sindicatos y otros grupos de la alianza– para mejorar la gestión y el suministro de las compañías municipales de agua, haciéndolas menos vulnerables a las presiones privatizadoras.

Al FNSA también se sumaron varias compañías públicas del sector, como los departamentos municipales de agua y saneamiento de Porto Alegre y Santo André, cerca de São Paulo. Ambas ciudades estaban entonces gobernadas por el Partido dos Trabalhadores (PT), que había desarrollado iniciativas pioneras en el ámbito de los presupuestos participativos y la gestión pública en general.

La FNU y la CUT se encargaron de proporcionar los recursos organizativos para el FNSA, incluida la secretaría ejecutiva. La Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), una ONG brasileña que opera a escala nacional y con una larga historia de educación popular, campañas e investigaciones con movimientos populares, también aportó ayuda logística a la iniciativa.

La confluencia de este diverso abanico de apoyos apunta a las amplias bases de la alianza. En efecto, el nombre –‘Frente Nacional’– se escogió específicamente para indicar que no estaba dominado por ningún



Un lema en la calle: el agua es para todas y todos.

grupo social en concreto, ya fuera un sindicato, una ONG, una organización de carácter confesional o un movimiento social.

Experiencia organizativa

Una de las aportaciones concretas de los sindicatos fue proporcionar redes bien organizadas e informadas de activistas con conciencia política y con experiencia organizativa en las comunidades de todo el territorio brasileño y sus muy diversas regiones.

La CUT había sido una fuerza organizativa fundamental en la lucha contra la dictadura, hacía menos de 15 años. Como tal, contaba con una importante y consolidada legitimidad como centro para la coordinación de distintos movimientos autónomos con objetivos comunes.

Por ejemplo, en 1983 la CUT había creado ANAMPOS (Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais) como medio para coordinar a movimientos sociales y sindicatos cuando surgiera la necesidad. En la lucha contra la dictadura, apenas una década antes de las batallas en torno a la privatización del agua, se había ido forjando una cultura de respeto mutuo –aunque no exenta de tensiones– entre distintos tipos de movimientos: urbanos y rurales, industriales y sociales, religiosos y seculares.

El marco de principios del FNSA, “por la garantía universal de servicios de agua y saneamiento a toda la po-

blación, independientemente de su condición económica y social”, actuó como base para un gran proceso de participación. Cada una de las organizaciones que integraban el Frente trabajó con el fin de desarrollar propuestas y estrategias para resolver la aún precaria situación del suministro de agua en Brasil, superar la corrupción endémica y proponer alternativas coherentes a la privatización. La idea era difundir y aplicar los principios de la democracia participativa desplegados en la práctica por la izquierda brasileña.

Este proceso participativo se combinó con intervenciones estratégicas y de alto perfil en instancias parlamentarias y judiciales. Por ejemplo, las intervenciones en la capital federal, Brasilia, siempre iban acompañadas de actividades colectivas, manifestaciones multitudinarias u otros actos organizados con un gran nivel de impacto.

Apoyo internacional

La dimensión internacional de la campaña contribuyó sin duda a estas intervenciones de alto perfil. En un momento clave de la ofensiva del Gobierno para conseguir que se aprobaran sus propuestas de privatización, el FNSA organizó un seminario en la Cámara de Diputados con ponentes de Sudáfrica, Canadá y una federación sindical global, la Internacional de Servicios Públicos, que tuvo un gran eco. En el seminario

se documentaron los costes sociales y ambientales que entrañaba que las corporaciones encabezaran el proceso de privatización en Brasil y en otros países, y se presentaron modelos alternativos para mejorar el sector público. “La ayuda y los intercambios internacionales han sido fundamentales en nuestra lucha”, afirma con convicción Abelardo de Oliveira Filho.

En el año 2000, esta campaña de múltiples niveles ya había conseguido cuestionar la legitimidad constitucional del traspaso de competencias de la gestión del agua del ámbito municipal al regional y había frustrado la propuesta del Gobierno para vender las compañías estatales de agua y saneamiento. Tras la elección del presidente Lula en 2002, el éxito de la campaña quedó simbolizado con el nombramiento de Oliveira Filho como secretario nacional de saneamiento ambiental.

La propuesta de privatización indiscriminada se abandonó. Sin embargo, la victoria no fue total. Más adelante, el Gobierno cedió a las demandas del capital internacional para que facilitara los partenariados público-privados (PPP) en los servicios públicos, incluida el agua. Varios municipios también claudicaron ante las presiones de compañías brasileñas para que privatizaran los servicios de agua.

- Una de las claves del éxito de la campaña fue la capacidad de los sindicatos para crear relaciones sostenidas (o ‘coaliciones profundas’) con las personas que usaban el servicio y con la ciudadanía en general, y no solo alianzas tácticas e instrumentales. Estas alianzas y relaciones tenían un doble fin. Por un lado, reunían en un mismo espacio distintas fuentes de conocimiento –práctico, especializado, investigador– que eran de vital importancia para transformar el servicio y su calidad. Las asambleas locales y regionales que desarrollaron alternativas ilustran este proceso de construcción de ‘contraconocimiento’.
- Una dimensión estratégicamente esencial de estas alianzas fue la colaboración internacional. Ya fuera a través de la Internacional de Servicios Públicos o de otras colaboraciones transfronterizas directas, condujo a un intercambio de información y a una perspectiva estratégica que, de otro modo, no se habría conseguido a escala nacional. Por lo tanto, el éxito de estas alianzas a la hora de contrarrestar las presiones del poder financiero y corporativo global dependió también de su capacidad para emplear una gran diversidad de fuentes de poder e influencia que les permitió ganar legitimidad y generar apoyos políticos a favor de la opción pública.
- Esto nos lleva a otra característica destacable de esta campaña: la importancia de las estrategias y las formas de organización para hacer frente al poder del capital más allá del lugar de trabajo y en las nuevas circunstancias de la globalización del mercado capitalista. Los sindicatos del agua en Brasil formaban parte de otras alianzas populares más amplias. No dependían del Partido dos Trabalhadores para abordar las cuestiones políticas más generales, aunque sí empujaron al proceso a ciertas secciones del partido. Las ambiciosas iniciativas del FNSA para movilizar el poder popular en torno al proceso político se calcularon para neutralizar la servicial sumisión de los gobiernos estatales a las presiones de las instituciones financieras internacionales.
- Por último, cabe también destacar la relativa autonomía del FNSA con respecto a los partidos políticos, incluido el Partido dos Trabalhadores, por el que probablemente habían votado la mayor parte de los y las integrantes del Frente. El FNSA construyó una autonomía de perspectiva y conocimiento, así como de organización, respaldada por los recursos independientes y la capacidad institucional de los sindicatos. Sobre la base de esta independencia, se pueden establecer relaciones estratégicas con los partidos políticos; al menos en teoría. En la práctica, las relaciones con los partidos políticos han sido complejas e irregulares, dependiendo, por ejemplo, del momento del ciclo electoral.

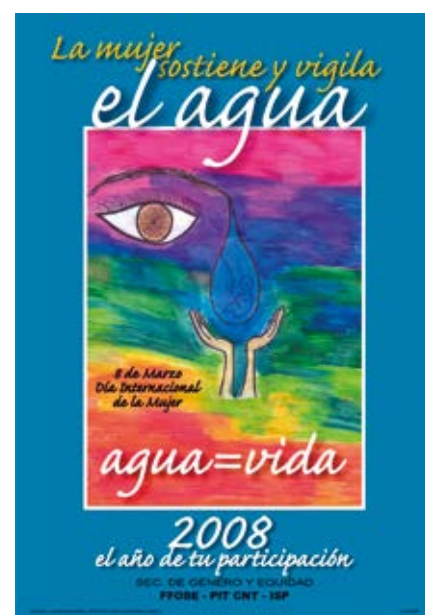
2. Uruguay: el eje sindical de un movimiento popular

En Uruguay, la historia empezó en 2002, cuando un diario filtró una carta de intención entre el Gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que se establecía un calendario para privatizar la compañía nacional de agua del país, Obras Sanitarias del Estado (OSE).

La publicación de la carta llevó a la creación de una poderosa alianza popular, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). La CNDAV tenía sus raíces en otra plataforma en la que había participado el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del agua, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), para luchar contra los primeros planes de privatización en el

departamento de Maldonado.

La FFOSE forma parte de la federación de sindicatos PIT-CNT, que, al igual que la CUT brasileña, desempeñó un papel clave en la resistencia a la dictadura (entre 1973 y 1985) y, por ese motivo, gozaba de un alto grado de legitimidad popular. Los trabajadores y las trabajadoras del agua también habían participado en aquella resistencia. La lucha por el agua como un derecho humano y un bien común era vista, por lo general, como una continuación de la lucha por la democracia y el sindicato siguió desempeñando un papel destacado. Carmen Sosa, organizadora sindical, explica que el sindicato aportó “el eje vertebrador” de la CNDAV.



Folleto conjunto sindical sobre el agua en manos públicas.



En Uruguay, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ha resistido a la privatización en la región de Maldonado.

Una fuerte conexión con el agua

Al igual que en Brasil, la preocupación inicial del sindicato eran los intereses de sus afiliados y afiliadas, ya que se estaban congelando puestos de trabajo y la carga laboral iba en aumento. Sin embargo, las inquietudes de los trabajadores y las trabajadoras muy pronto fueron más allá de sus propios empleos. Como personal de la compañía nacional de agua, a la que se había amenazado desde fines de la década de 1990 con el desmantelamiento y la privatización, también sentían una fuerte conexión con los campesinos y las campesinas, la población rural cuyos medios de vida dependían del suministro de agua.

“Para nosotros y nosotras”, comenta Adriana Marquisio, presidenta de la FFOSE entre 2004 y 2010, “la situación de falta de agua en el campo es muy sensible. Hay funcionarios de OSE hasta en las localidades rurales más pequeñas. Crecieron en esos pueblos, viven en ellos, son parte de la población afectada. El agua es demasiado vital como para que la función de suministrarla sea ejercida como un empleo más”.

El sindicato y sus aliados en la CNDAV consideraban que la defensa institucional más sólida frente al FMI se hallaba en el terreno constitucional. Debían encontrar una vía política que burlara al Gobierno en el poder. La solución la encontraron en un éxito del pasado contra la privati-

zación. En 1992, el 72 por ciento del electorado había votado en contra de una ley que habría abierto las puertas de prácticamente todas las compañías del Estado a la privatización. La CNDAV se inspiró en este precedente y sacó el máximo partido de una cláusula de la Constitución que permite a la ciudadanía convocar un referendo si cuenta con el apoyo de al menos 300.000 personas (más del 10 por ciento de votantes censados).

El referendo propondría que la Constitución se modificara para incluir un pasaje que estableciera que el acceso al agua potable y al saneamiento “constituyen derechos humanos fundamentales” y que estos servicios públicos debían ser “prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. En apenas un año, la campaña reunió las 300.000 firmas que se necesitaban.

Sin duda, la labor fue más fácil gracias a la larga tradición y cultura de los servicios públicos en Uruguay. Pero sabían que esa cultura debía activarse y que era necesario concienciar a la población de que algo que habían tomado por descontado como un bien naturalmente común se veía ahora amenazado por la apropiación privada.

La campaña a caballo

En Montevideo, la capital del país, varios movimientos urbanos y ONG desempeñaron un destacado papel

en la CNDAV y recurrieron a todas las vías a su alcance para llegar a la gente. Visitar escuelas y universidades fue una actividad muy importante, no solo como mecanismo para educar a los y las jóvenes sobre temas relacionados con el agua, sino también porque “sabíamos que volverían a casa y hablarían con sus familias”, explica Adriana. Fuera de la capital, la protagonista fue principalmente la FFOSE, en colaboración con organizaciones rurales. Carmen Sosa recuerda cómo “en 2004, el secretario general de la FFOSE, con otros compañeros, viajó por todo el país a caballo durante 23 días, de pueblo en pueblo, para hablar con la gente sobre la necesidad de una reforma constitucional”.

El sindicato también utilizó su afiliación a la Internacional de Servicios Públicos para organizar el respaldo internacional. Este respaldo se tradujo, entre otras cosas, en estudios y argumentos –basados sobre todo en la experiencia internacional de casos de privatización– que la FOSSE pudo utilizar para generar los apoyos necesarios para el éxito del referendo.

El otro pilar del compromiso del sindicato con el agua como un bien común y con su suministro como servicio público se ha manifestado en su interés por conseguir que OSE sea una organización que rinda las debidas cuentas por sus fondos públicos. “No solo defendemos el agua pública como un derecho”, señala Adriana, “sino que también trabajamos por la mejor eficiencia posible en la gestión del agua. La salud de la población está en nuestras manos”.

Una de las amenazas a la eficiencia pública en OSE ha sido la corrupción. Los y las integrantes del sindicato tuvieron un papel destacado en las medidas emprendidas en 2002 por la compañía de agua uruguaya para eliminar la corrupción y en la colaboración con su directiva para transformarla en una compañía pública modelo. Uno de los elementos importantes de ese modelo es la exigencia formal, tras el éxito del referendo, de que la ciudadanía y la plantilla tengan un papel efectivo en la gestión de la compañía. El proceso para materializar esta realidad aún está en curso, pero el nivel de participación de ciudadanía y ONG en la CNDAV ha preparado el terreno. “Los ciudadanos



Campaña para Agua en Manos Públicas en Uruguay.

y las ciudadanas insistieron sobre este punto”, recuerda María Selva Ortiz, de REDES, una organización local afiliada a Amigos de la Tierra, “y debido al papel que desempeñó la ciudadanía en la campaña, no se nos podía negar la participación”.

Partenariados público-públicos

Otra dimensión de este ideal de compañía pública modelo es el fuerte hincapié en la cooperación con otras compañías públicas de agua para encontrar las mejores soluciones a los problemas que enfrentan, compartir conocimientos técnicos y de otra índole, y apoyarse entre sí. Un elemento determinante de este proceso es la creación de ‘partenariados público-públicos’ como alternativa a los partenariados público-privados, ya que generan redes de respaldo mutuo que no entrañan necesariamente el intercambio de dinero.

La FFOSE ha sido pionera en esta estrategia, convenciendo a OSE de que colaborara en el establecimiento de este tipo de partenariados con otras compañías de agua en toda América Latina. Entre estas estarían DMAE en Porto Alegre, Brasil, AAPOS en Potosí, en el norte de Bolivia, y Sedacusco en Cusco, Perú.

Un ejemplo de la cooperación con AAPOS sirve para ilustrar el significado práctico del término ‘partenariado’,

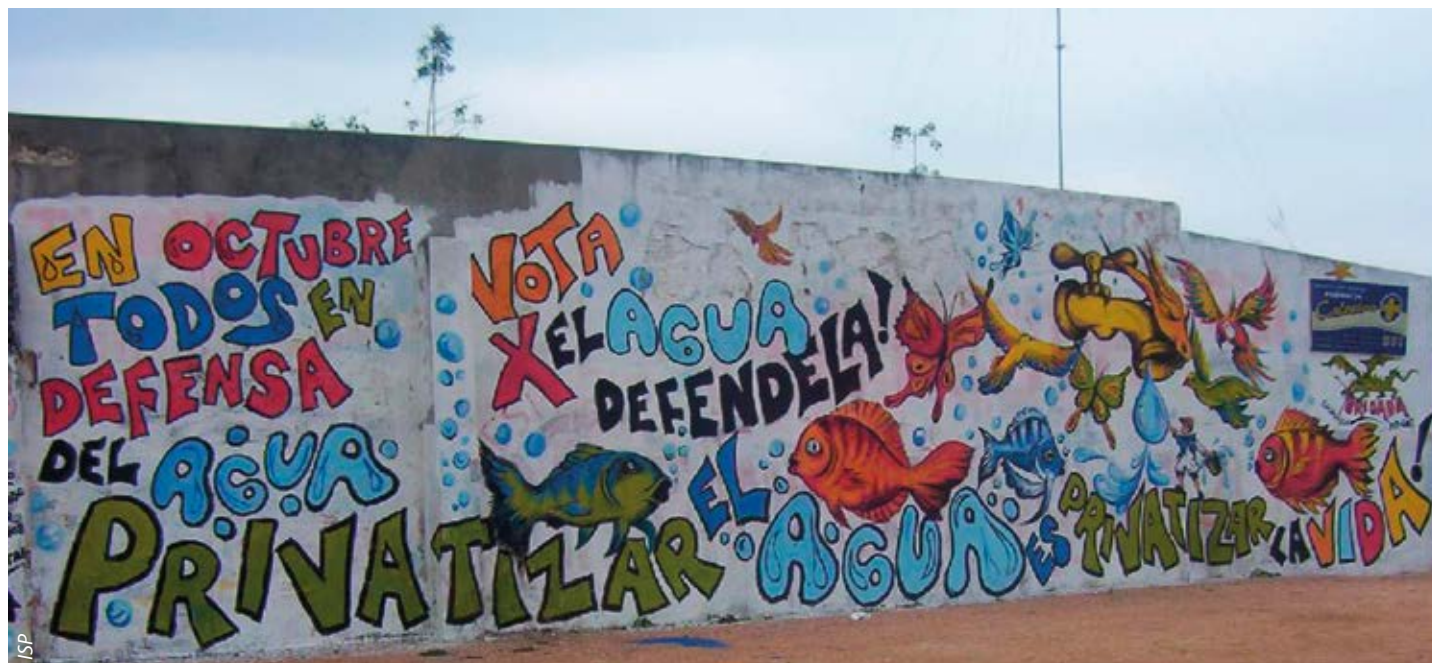
que puede resultar bastante ambiguo. El departamento de Potosí se encuentra tan elevado con respecto al nivel del mar que, hasta hace poco, había al menos un pequeño pueblo que no podía recibir suministro de agua potable. OSE y FFOSE visitaron la zona para estudiar de cerca el problema. Más tarde, Pedro Lupaz, ingeniero de OSE, volvió al lugar para seguir investigando durante un tiempo, sin cobrar nada excepto el pago de su viaje, y planteó una propuesta para solucionar el problema.

El fomento de estas relaciones entre organismos públicos, que siempre implican al sindicato del agua y a la compañía pública, es una alta prioridad para la FFOSE. Adriana se enorgullece de que OSE cuente ahora con una oficina dedicada a desarrollar estos partenariados, “la oficina de Cooperación y Solidaridad Nacional e Internacional”. Las relaciones con el sindicato son cruciales. “Cada semana”, resalta Adriana, “se reserva un día, un espacio institucional, para trabajar con los sindicatos”. Y en muchos sentidos son los sindicatos los que actúan como fuerza motriz del proceso, en particular en las compañías (por ejemplo, en DMAE, donde el sindicato presiona para que la dirección se implique).

Sin embargo, las cosas no siempre son fáciles. A veces, se producen estallidos de colaboración y, después, esta se desvanece. “El problema más complicado es que los liderazgos cambian a menudo y la cooperación se detiene”, lamenta Adriana. A pesar de ello, este no deja de ser un proceso innovador e importante que aún está echando raíces. Además, se trata de un proceso que su oficina de la cooperación también está extendiendo a otros ámbitos del sector público en Uruguay, como la vivienda. Adriana señala: “Les ayudamos a desarrollar la cooperación con otros organismos públicos para intercambiar ideas, técnicas y conocimientos y, tal vez, iniciar proyectos conjuntos”.



Sindicatos de la ISP demandan que se implemente el Derecho Humano proclamado por Naciones Unidas a Agua Potable y Saneamiento a través de los servicios públicos.



Mural callejero en Uruguay pidiendo que se proteja a los sistemas públicos de agua de la privatización.

LECCIONES PARA EL FUTURO

- La campaña demuestra lo importante que es reforzar y dar voz al compromiso popular latente con el patrimonio natural común, del que el agua es el símbolo más cotidiano. Las corporaciones transnacionales y los organismos políticos que les allanan el camino dan por sentado que la opinión pública es débil y pasiva. Una de las claves del éxito de la CNDAV fue la forma en que transformó este desdén por las personas en una vulnerabilidad decisiva para el Gobierno y el FMI. Y lo consiguió nombrando explícitamente y homenajeando al agua como un bien común, volviendo a despertar la conciencia popular de que les pertenecía por derecho y, por tanto, no se podía vender. Esta idea impregnó toda la campaña, desde el nombre mismo de la alianza, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, hasta todos sus esfuerzos para llegar y movilizar a quienes eran conscientes de su dependencia del agua.
- Otro aspecto fundamental de la campaña fue el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras asumieran una responsabilidad especial como salvaguardas de este patrimonio común. En este sentido, el papel de la FFOSE en la creación de la CNDAV y en su movilización para participar en ella –no solo entre los trabajadores y trabajadoras, sino también empleando sus recursos para llegar a las comunidades rurales– es ejemplar.
- La CNDAV reconoció que la lógica de defender el agua como un bien común y de protegerla a través de la Constitución pasaba por una gestión democrática y transparente. También comprendió que integrar el derecho al agua en la Constitución era algo necesario pero no suficiente. Una verdadera democracia exige la participación efectiva de la ciudadanía y trabajadores y trabajadoras en el funcionamiento de la compañía pública para garantizar que se administre como un bien común y esté al alcance de toda la población.
- Como sucede con todas las experiencias de este tipo, no hay victorias eternas y la contratación de trabajadores y trabajadoras eventuales y con bajos salarios, a través de compañías privadas, es un problema creciente. La FFOSE está luchando contra esta tendencia y ha cosechado cierto éxito. Sin embargo, sirve para recordar que el sindicato y la CNDAV deben seguir sus actividades de educación y sensibilización y haciendo campaña sobre la importancia del agua como bien común, que se debe gestionar con competencia, cuidado y compromiso. Al mismo tiempo, el sindicato ha logrado que se apruebe una ley para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras informales, con lo que resultan una opción menos barata para la compañía y se fomenta que se creen más empleos estables.

3. Italia: “se escribe agua, se lee democracia”



Una manifestación en Roma a favor del ‘Sí’ en el referendo para guardar el agua en manos públicas - el 95% de las y los votantes estuvieron de acuerdo.

Las luchas por el agua no solo han tenido un papel protagonista en América Latina. En 2009, el Gobierno de Berlusconi en Italia aprobó una serie de decretos que exigían a las operadoras públicas municipales que emprendieran un proceso de privatización. Una de las leyes sobre la privatización del agua disponía que las compañías privadas que desearan participar en servicios públicos de agua pudieran hacerlo con “igualdad de trato y sin discriminación” y se las animaba a adquirir hasta el 70 por ciento de cualquier compañía pública cotizada.

Otra de las leyes establecía que el precio de los servicios de agua se fijaría sobre la base de un retorno garantizado de la inversión del 7 por ciento. Esto significaba que las compañías privadas de agua podrían cobrar cuanto quisieran para asegurarse más ganancias y promover su visión del agua como un activo económico en lugar de como un bien común. Pero los y las activistas resueltos a defender el agua como un patrimonio común, que habían ido siguiendo el fenómeno del acaparamiento internacional de aguas y el éxito de las resistencias, estaban preparados para el desafío. De hecho, desde fines de la década de 1990, se habían ido reuniendo, desde

distintos municipios y movimientos, para preparar una campaña pública.

Un millón de firmas

Su respuesta inmediata fue crear el Foro Italiano de los Movimientos por el Agua y organizarse para conseguir el millón de firmas que necesitaban para celebrar un referendo con el fin de mantener la titularidad pública del agua. Finalmente, se consiguió la firma de 1,4 millones de personas –más que en cualquier otra petición de referendo hasta la fecha–, movilizadas por el objetivo de que el agua siguiera siendo un *bene comune*. El siguiente obstáculo que se debía superar antes de que el referendo tuviera efecto jurídico era conseguir que participara más del 50 por ciento del electorado. Esta meta también se logró: la participación fue del 56 por ciento y el 94 por ciento de votantes respondieron ‘sí’ al agua pública. Y esto en un contexto en que Berlusconi había ordenado a sus medios de comunicación (entre los cuales, la mayoría de los grandes canales de la televisión italiana) que no retransmitieran ninguna noticia sobre el referendo.

Detrás de este éxito se encuentra la historia de un nuevo tipo de campaña policéntrica y molecular, que

aglutinó a los actores sociales más diversos. La campaña se coordinó de forma horizontal y rotando responsabilidades, de manera que, con los años, se fue desarrollando un liderazgo difuso a través del que se difundían las capacidades. Se utilizaron medios de comunicación virtuales, pero también una amplia movilización popular en las calles, los mercados y los centros culturales. Estos medios alcanzaron y acabaron sobrepasando a los grandes medios dominantes.

En cierto sentido, la victoria en Italia fue parecida a la de Uruguay, ya que la campaña también hizo un fuerte hincapié en la movilización popular y celebró un referendo; sin embargo, en Italia, los partidos políticos no desempeñaron el mismo papel visible y activo que demostró el Frente Amplio en Uruguay. El comité organizador estaba formado exclusivamente por organizaciones cívicas, tanto de ámbito local como nacional. Y todas ellas pudieron aportar sus puntos fuertes y organizar un frente común a escala local, regional y nacional.

El sindicato italiano de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos Federazione Lavoratori Funzione Pubblica (FP-CGIL) participó de forma activa en todos los niveles de la alianza. Los partidos políticos de izquierda, por otro lado, dieron lugar a un comité de apoyo paralelo. “Las numerosas identidades y las distintas raíces culturales de los sujetos –tanto individuales como colectivas– que se fueron reuniendo generaron una nueva identidad común”, comenta Tommaso Fattori, del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua.

La lucha continúa

Pero la batalla está lejos de haber terminado. Aunque la mayor parte de la ciudadanía italiana votó en el referendo en contra de privatizar el agua, el Gobierno tecnocrático de Mario Monti intentó más tarde añadir el agua a los servicios públicos que se debían privatizar al amparo de las políticas de austeridad.

El movimiento italiano del agua reaccionó rápidamente, movilizándolo a la población y cabildeando en el Parlamento. Algunas regiones también llevaron el caso al Tribunal Constitucional de Italia, que en julio de 2012 falló en contra de los intentos del Gobierno para eludir los resultados del referendo. Sin embargo, parece improbable que este sea el fin del asunto. “Prevemos muchos más años de lucha por delante”, decía Rosa Pavanelli, entonces presidenta de la FP-CGIL. “La obsesión por privatizar el agua no ha desaparecido.”

Al fin y al cabo, la privatización del agua forma parte de la persistente ofensiva neoliberal para que toda actividad antes no mercantilizada y desplegada en la esfera de lo público se someta al mercado y, como tal, no se puede derrotar a escala meramente nacional. Por ese motivo, los y las activistas en Italia han aportado su energía y capacidades a la campaña para recoger un millón de firmas y presionar a los Gobiernos de la Unión Europea para aplicar el nuevo derecho humano al agua y el saneamiento adoptado por las Naciones Unidas. Esta Iniciativa Ciudadana Europea –iniciada por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP)– persigue tres grandes objetivos: garantizar el acceso universal al agua, convencer a la Comisión Europea de que adopte un enfoque basado en los derechos en los servicios de agua suministrados a través del sector público y conseguir que el acceso universal al agua y el sanea-

miento forme parte de la política de desarrollo de la UE. Si la campaña sigue adelante y difunde los métodos de la campaña italiana, tiene muchas probabilidades de éxito.

Las batallas en Italia seguirán adelante; hay mucho por hacer en el sector del agua. El movimiento del agua se centrará ahora en volver a situar bajo control público aquellas compañías públicas que se privatizaron total o parcialmente. Defender y democratizar los servicios públicos –‘comunificarlos’ en lugar de mercantilizarlos, por usar las palabras de Tommaso Fattori (ver el apartado de Lecturas complementarias)– nunca es una cuestión de una sola lucha. Un éxito siempre debe ir seguido de nuevas campañas.

LECCIONES PARA EL FUTURO

- La primera lección del referendo, que tuvo lugar relativamente poco después de la derrota de la histórica movilización popular en Italia contra las guerras de los Estados Unidos y el Reino Unido en Afganistán e Iraq, fue que existía una posibilidad real de cambiar las cosas. Esto significó, en esencia, que se restableció la acción política colectiva de base. El movimiento aprovechó que el Gobierno había calculado mal la concienciación de la ciudadanía y convirtió el intento de este de mantener una ‘democracia anoréxica’, en palabras de Tommaso Fattori, en un punto débil que resultaría fatal.
- La campaña demostró lo importante que es prestar atención a los medios organizativos, así como a los fines. Un aspecto fundamental del éxito del movimiento fue que se organizó con múltiples centros, de forma horizontal, valorando la pluralidad de conocimientos, fomentando la participación directa y personal en la toma de decisiones y favoreciendo la rotación de las responsabilidades y el liderazgo difuso.
- El agua está demostrando ser una piedra angular sobre la que reconstruir el horizonte más amplio posible de democracia y patrimonio común. Se está convirtiendo en un auténtico ariete contra el sistema absoluto de privatización global. Sin embargo, las victorias contra la privatización son siempre precarias; los movimientos nunca pueden ‘hacer las maletas y volver a casa’. Todo lo contrario: deben ampliar su alcance para neutralizar el carácter reptador e invasivo del poder neoliberal.

Europa:

cuando los artífices del Estado del bienestar intentan acabar con él

Quedémonos en Europa un poco más. Es aquí donde se establecieron originalmente las instituciones del Estado del bienestar, construido sobre los principios de la prestación social, es decir, de la provisión del Estado para satisfacer las necesidades sociales de forma universal, y donde ahora, tras la crisis financiera de 2008, se ha acelerado la comercialización de esas mismas instituciones en nombre de la ‘austeridad’ (si bien el proceso se inició en la década de 1980 en muchos países europeos, por ejemplo, en la asistencia social). Irónicamente, la idea de la austeridad se usó por primera vez, tras la Segunda Guerra Mundial, aplicada a todo excepto el Estado del bienestar: gastar en escuelas y hospitales era algo generoso en un momento en que la gente evitaba lujos y pagaba impuestos para financiar

la reconstrucción en la posguerra. Ahora se evaden los impuestos y se amplía el crédito a un alto interés para promover el consumo personal en el mercado, mientras se recorta en salud y educación.

La piedra de toque en este contexto es Grecia, que ilustra de forma especialmente cruda la tragedia de lo privado y el potencial de lo público. Por un lado están las instituciones del régimen neoliberal internacional –la ‘troika’ de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo– que desean vender los bienes públicos del país y usar el dinero para pagar los astronómicos cargos por intereses de los acreedores. Y por el otro, están las personas, orgullosas de sus tradiciones democráticas y movilizadas para defender su patrimonio común construyendo redes de solidaridad mutua.

1. Grecia: resistencia ante la troika

La privatización y la naturaleza del Estado están convirtiéndose en temas centrales de la lucha contra la austeridad en Grecia. La troika está intentando acelerar la venta de los bienes y recursos públicos del país concentrándolos en un *holding* a través de los que se subastarán uno tras otro. El Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (TAIPED), que es el pomposo nombre que se le ha dado a la sociedad, podría muy bien ser una casa de subastas anunciando que ‘no puede quedar nada’.

La resistencia a esta transferencia de bienes al mercado corporativo se enfrenta a un desafío. Según una encuesta realizada en 2011, el 75 por ciento de la población griega opinaba que la privatización era necesaria; en 2012, esa cifra había bajado hasta el 62 por ciento, pero sigue estando muy por encima de la mitad de la población (incluido más del 40 por ciento de quienes votaron por la coalición de la izquierda radical Syriza). No obstante, esas mismas encuestas apuntan

también a un punto vulnerable de la troika: una vez más, es el agua el tema en el que la mayoría se opone a la privatización. Y es en torno a este tema en que está empezando a ganar impulso la resistencia.

Las primeras iniciativas en Grecia para la resistencia políticamente decisiva sobre el agua surgieron en la segunda mayor ciudad del país, Tesalónica. Aquí, los primeros pasos hacia la privatización en 2007 se ralentizaron en parte gracias a la oposición del sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del agua, que organizó una huelga de hambre de cuatro días durante la feria comercial internacional de la ciudad. Las primeras licitaciones se anunciaron finalmente en 2009 y, una vez más, el sindicato –que, a diferencia de la mayoría de sindicatos en Grecia, había mantenido con firmeza su autonomía de todos los partidos políticos– respondió ocupando durante 12 días el principal edificio de la compañía.

La reputación que se ganó el sin-

dicato del agua entre los círculos activistas de Tesalónica resultó ser una sólida base a partir de la que se ha podido construir la creciente campaña actual. El presidente del sindicato, Georgios Archontopoulos, explica que en 2009 solía autoinvitarse a las reuniones de los grupos vecinales para plantear argumentos en contra de la privatización. Ahora, señala, “siempre nos están pidiendo que vayamos a las reuniones y hay muchas más”.

“Nos pasamos más de seis meses intentando convencerles de que actuamos como ciudadanos y ciudadanas, y no por temor a perder nuestro trabajo”, prosigue. “La verdad es que nos estaban poniendo a prueba y no lo sabíamos. Como sabes, se suele tirar mucho barro, a veces con razón, contra el funcionariado y en los sindicatos puede darse mucha corrupción.” El sindicato ayudó a superar esta actitud –por lo general negativa ante el funcionariado– asumiendo un papel militante no solo contra la

privatización, sino también contra la corrupción, la subida de los precios y el creciente número de cortes en la conexión de agua. No fue de extrañar, por lo tanto, que las nuevas energías y convergencias impulsadas por la ocupación de la plaza de la Torre Blanca en Tesalónica por un grupo de jóvenes –la versión en el norte de Grecia del ‘movimiento de los indignados’– acabara desembocando en discusiones entre ‘los indignados’ y los trabajadores y las trabajadoras del agua.



La Iniciativa 136

Fue precisamente de esas discusiones de donde surgió la ‘Iniciativa 136’. La idea era que si todas las personas que usaban el servicio compraran una acción no transferible de la compañía pública de agua, “la población podría ser propietaria de la compañía a través de un sistema de cooperativas vecinales de usuarios y usuarias, aglutinadas en una sola cooperativa general”. El nombre procede de 136 euros: la cantidad que se obtiene de dividir los 60 millones por los que se venderá la compañía entre el número de contadores de agua en la ciudad. “Se trataría, en la práctica, de una respuesta totalmente pública al partenariado público-privado de la troika”, explica Theodoros Karyotis, miembro fundador de la Iniciativa 136 y activo en los movimientos sociales de Tesalónica, apoyando, por ejemplo, a la plantilla de la fábrica Vio.Me durante su ocupación y, ahora, con su proceso de autogestión de la producción.

Georgios Archontopoulos recuerda cómo “la idea surgió en un primer momento de una rueda de prensa

durante las primeras luchas. Para reforzar el argumento de la titularidad pública, dividimos el precio en bolsa de la compañía por el número de personas usuarias para demostrar que el público podría comprar acciones y que la compañía se podría quedar en manos públicas. Con ‘los indignados’ convertimos esta idea en una campaña práctica”. En realidad, el impacto práctico de la Iniciativa 136 ha estado fundamentalmente en su poder de propaganda, ya que sirve de elocuente ejemplo de cómo se puede gestionar el agua como un recurso común “sin depender de compañías privadas ni del Estado existente”, en palabras de Kostas Marioglou, otro dirigente de los trabajadores y las trabajadoras del agua. Aunque se han creado cooperativas en ocho de los 16 barrios de Tesalónica y el gobierno municipal de la ciudad les ha reservado una unánime bienvenida, la gente no se puede permitir pagar los 136 euros de golpe. Y los municipios prácticamente no tienen fondos para seguir funcionando.

“Nos vemos atacados por todos los frentes”, afirma Theodoros Karyotis, justo después de volver de una manifestación de 20.000 personas contra las operaciones mineras de Eldorado en unas montañas cercanas y enfrentarse a la represión policial totalmente indiscriminada contra toda aquella persona, incluso escolares, sospechosa de participar en la protesta. Pero los y las activistas de la Iniciativa 136 no piensan abandonar el proyecto práctico. Ahora están hablando con la influyente Red Europea por el Agua Pública (EPWN) sobre cómo reunir los fondos necesarios para convertir la solución público-pública en una realidad. “Ya no es un problema meramente griego. Se ha convertido en un tema emblemático para el movimiento europeo”, explica Karyotis. “Si la privatización no es derrotada, será un auténtico revés para que el agua vuelva a la esfera pública, como está pasando en otros lugares.”

Una amplia coalición

A la vez que se impulsa la búsqueda de fondos y de estructuras legales para la cooperativa, los y las activistas de la Iniciativa 136 se dedican a construir una coalición amplia contra

la privatización. “Estamos trabajando sobre dos vías. Por un lado, la mayor alianza posible contra la privatización y, por el otro, explorar medios de socialización directa como alternativa”, señala Theodoros Karyotis. “Debemos unirnos contra la privatización”, subraya Kostas Marioglou, “y poder debatir la mejor forma de gestionar el agua para el bien común”. Y es que, además de la unidad, existe un encendido debate sobre la Iniciativa 136. “¿Por qué debemos comprar algo que ya nos pertenece?”, se preguntan muchas voces en Syriza. “El problema”, plantea Karyotis, “es cómo detener la privatización. Hacer presión y protestar, de por sí, ¿nos lleva a algún lado? La Iniciativa 136 supone en cierto sentido luchar contra ellos en su propio terreno, explotando un vacío legal, y eso hará difícil detenernos si contamos con los fondos y el apoyo popular necesarios”.

“El objetivo es común”, insiste Georgios Archontopoulos, que se presentó a las elecciones por Syriza, “incluso si disparamos desde distintos lugares. ¡Rodeémos el objetivo!”. El movimiento del agua que se está desarrollando en el Ática, la región a la que pertenece Atenas, está confluendo en este mismo objetivo frente a la amenaza inminente de privatización. Al igual que el agua que está defendiendo, en todos los municipios del Ática, desde el puerto de El Pireo hasta los grandes suburbios residenciales de clase trabajadora en Atenas, está cobrando fuerza una oleada de campañas.

Una de las fuerzas impulsoras decisivas en este contexto es un interesante y progresista grupo de trabajadores y trabajadoras de EYDAP, la compañía pública de agua de Atenas. El grupo se llama SEKE, que significa ‘movimiento de unidad participativa’. Vasilis Tsokalis, uno de los miembros fundadores, explica sus orígenes, durante las elecciones para elegir a la representación laboral para la junta de la EYDAP. “De repente, surgió esta nueva organización, procedente de la izquierda y el centro izquierda, e independiente de los dos partidos tradicionales. Queríamos deshacernos de los integrantes de la junta, que llevaban en ella más de diez años. Uno era miembro del PASOK y, el otro, de Nueva Democracia”, explica.

“De hecho, habían sido un desastre, trabajando con la dirección y los partidos políticos, diciendo que estaban en contra de la privatización pero sin hacer nada al respecto.”

SEKE se hizo de inmediato con el 17 por ciento de los votos. “Pero sabíamos que podíamos hacernos más fuertes pasando a la acción con otros grupos que luchaban contra la privatización y a favor de una gestión del agua por el bien común”, dice Tsokalis. El grupo se puso en contacto con la campaña ‘Salvemos el agua griega’ y, juntos, se embarcaron en la tarea de convencer a los 45 municipios de la región que respaldaran un compromiso con el agua pública.

En todo este proceso, se dio un gran paso adelante cuando cientos de personas se reunieron en Atenas y Tesalónica para escuchar a varios ponentes internacionales sobre el tema del agua. Las campañas del agua habían hablado mucho sobre la experiencia de la remunicipalización en París y otras ciudades europeas, y de cómo esta representaba una tremenda mejora en comparación con la propiedad privada. Pero ahora la gente podía escuchar estos mensajes en directo y preguntar todo lo que quisiera.

Eso es exactamente lo que sucedió cuando Ann Le Strat, teniente de alcalde de París y responsable del ámbito del agua, habló ante la que, según ella, era la reunión más multitudinaria en la que jamás había intervenido. Ann expuso los beneficios que suponía que la titularidad y la gestión del agua volvieran a depender de la ciudad de París. Para empezar, el municipio había ganado 35 millones de euros que, anteriormente, habían ido a parar a manos de Suez, la empresa responsable de la privatización y que ahora deseaba asumir el control del agua en Grecia.

Actualmente, el agua de París está gestionada por una junta en que participan representantes de los trabajadores y las trabajadoras y de la ciudadanía, supervisada de forma independiente por científicos y re-

presentantes públicos. Por otra parte, mientras que con el sector privado los precios no dejaban de aumentar, apenas un año después de su retorno a la propiedad pública estos habían disminuido un 8 por ciento. Ahora, los precios son un 40 por ciento más bajos que en las afueras de la ciudad, donde el agua aún está a cargo de una empresa privada.



Toda esta información, que demostraba la viabilidad de las alternativas, desató un torrente de preguntas. “Había tanta curiosidad, tantas preguntas, que se estaba haciendo demasiado tarde y tuvimos que parar antes de que nos cerraran la sala”, recuerda Georgios Archontopoulos. En su opinión, ese encuentro también tuvo un fuerte impacto sobre quienes se querían hacer con la compañía del agua de Tesalónica: “Ahora nos toman más en serio”.

El representante de Suez que acecha todas las campañas contra la privatización estuvo presente en la reunión y, al parecer, se mostró algo desconsolado por su gran éxito. “¿De dónde sacáis a toda esta gente?”, le preguntó a un dirigente sindical de la zona al salir de la sala.

Sin embargo, no son las grandes reuniones en el centro de la ciudad con ponentes internacionales las que definen la energía de la campaña; se trata, sobre todo, de los encuentros y las iniciativas en los barrios y las pequeñas localidades. Georgios explica

que hace poco intervino en una reunión en Eleysina, una zona de Atenas con un alto índice de desempleo, junto con un trabajador de EYDAP. “Fue la primera vez”, comenta, “que las compañías de agua de Tesalónica y Atenas hablaron públicamente en contra de la privatización”.

Movimiento ciudadano

Vasilis Tsokalis afirma categóricamente: “Este es un movimiento ciudadano”. Theodoros Karyotis destaca la importancia de “la autonomía de nuestro movimiento con respecto a todos los partidos políticos”. Su insistencia en este punto surge de una historia en la que la sociedad civil independiente se ha visto asfixiada por los dos grandes partidos políticos. Pero también surge de un sentimiento positivo de emancipación de las jerarquías, las dependencias y las formas generalizadas de dominación asociadas con un Estado que funciona basándose en el clientelismo.

En el pasado, muchos funcionarios y funcionarias intentaban personalmente trabajar al margen de esa cultura, pero ahora esa actitud individual se está convirtiendo en un modelo colectivo y alternativo de participar en política. Tras el poderoso movimiento de protestas de los últimos dos años, el florecimiento de colaboraciones autoorganizadas como la Iniciativa136, el grupo SEKE, la ocupación de la fábrica Vio.Me y muchas otras son buena muestra de ello.

Nadia Valvani, diputada de Syriza e integrante de su comité económico encargado de la política de privatizaciones, intuyó esta realidad en el auge de Syriza durante las primeras elecciones de 2012, cuando el voto de la coalición aumentó del 4 por ciento que había obtenido en 2009 hasta el 27 por ciento. “Había algo más profundo que simpatía política”, recuerda. “En las reuniones en las casas de la gente sentía una especie de proceso de emancipación. Allí había gente que no era especialmente de izquierdas que quería cambiar toda su forma de vida y poner fin a las relaciones clientelistas en la política. Acudieron a Syriza buscando una salida. Quieren participar; no solo votar. Si no lo hubiera vivido en primera persona, no habría estado convencida.”

Esta emancipación también libera capacidades productivas. Antigoni Synodinou, una ingeniera con un cargo de responsabilidad en EYDAP, apunta a “la enorme cantidad de talento desperdiciado” con el clientelismo; como dirigente sindical, Georgios Archontopoulos subraya cómo “se ignoran las opiniones y la información de trabajadores y trabajadoras”.

En otras palabras, lo que se describe aquí es una fuerza económica: la creatividad social, impulsada y alimentada a través de la cooperación y la reciprocidad. Convencionalmente, se le da el nombre de ‘capital social’ y tiende a utilizarse para fomentar redes de cohesión social con el objetivo de hacer frente a las dificultades económicas, sin cuestionar las desigualdades estructurales. Más radicalmente, y con la transformación en mente, esta misma capacidad social puede entenderse como el potencial productivo de economías participativas y democráticas, incluso en la organización del sector público.

Cambiando la opinión pública

Las encuestas sobre la privatización implican que esas alternativas son fundamentales para cambiar la opinión pública, y es que las mismas personas que ven la privatización como una necesidad también consideran que esta beneficia a multinacionales extranjeras y no a los consumidores y las consumidoras. Esto apunta a que su opinión tiene más que ver con cierta hostilidad hacia el Estado existente, un Estado ya inclinado a satisfacer intereses principalmente privados. El problema es la falta de concienciación sobre las posibilidades de gestión alternativa de los servicios públicos y los bienes comunes.

El comité de Economía de Syriza es muy consciente de la importancia de las iniciativas autónomas de la coalición –tanto de ciudadanos y ciudadanas como de trabajadores y trabajadoras– para desarrollar alternativas convincentes y prácticas. En un libro que publicará próximamente, uno de los portavoces económicos de Syriza, Euclid Tsakalotos, apunta a la relevancia formativa del debate en los primeros años de Syriza en torno al ‘gubernamentalismo’. La conclusión significó que Syriza no solo

apoyaba a los movimientos sociales, sino que también “aprendía de estos movimientos sobre la naturaleza de la alternativa”. La dirección de Syriza ve este ideal de apoyar a los movimientos autónomos y aprender de ellos al mismo tiempo que aspira al Gobierno como un desafío clave, en un momento en que se prepara para transformarse de coalición en partido. Andreas Karitzis lo explica así: “Syriza es peligrosa porque combina esos dos elementos, la gobernabilidad y la fuerte conexión con los movimientos sociales que luchan contra el Gobierno. La estrategia del Gobierno consiste en obligarnos a decidir. Soy optimista porque las bases de Syriza, sean más revolucionarias o más reformistas, reconocen que no hay solución si perdemos alguno de estos elementos”. Si la coalición contra la privatización del agua en Grecia, que al tiempo que encabeza la resistencia está experimentando con alternativas, desarrolla su impulso, podría resultar que el intento de la troika para vender el agua termine siendo, una vez más, un mal paso por parte de la clase política.

La sentencia del Consejo de Estado

La fuerza de la campaña popular para defender el agua ha ganado lo que se podría definir como una victoria histórica con la sentencia del Symvoulío tis Epikrateias, el Consejo de Estado de Grecia, que actúa como su Tribunal Supremo y tiene competencias para anular las decisiones del Gobierno. Los procedimientos jurídicos en el país avanzan con lentitud y aún es demasiado pronto para anticipar el verdadero significado de la sentencia, pero según la información no oficial procedente del Consejo de Estado en noviembre de 2013, el agua no se puede privatizar.

Los importantes motivos para la sentencia aún no se han anunciado. Este detalle, sin embargo, es de poca importancia hasta que la sentencia se redacte formalmente y se dé a conocer al público. Tampoco existe un calendario exacto para cerrar esta última etapa formal en el funcionamiento de este tribunal.

El enfoque del Consejo de Estado es uno de los resultados de las cam-

pañías para defender el agua como un bien público en Atenas y Tesalónica. En junio de 2013, las dos compañías públicas de agua, EYDAP y EYATH, junto con varios grupos ciudadanos, solicitaron que este tribunal fallara sobre la legalidad de la privatización del agua.

Sin embargo, sus sentencias y la aplicación de estas son complejas y ambiguas. El tribunal tiene una larga historia de sentencias en contra de ventas que, según la ciudadanía, suponían privatizar bienes comunes. Dos de las que despertaron una especial atención fueron la venta de Kassiopi, una zona especialmente hermosa de la isla de Corfú, a la sociedad de inversiones estadounidense NCH Capital, y la venta de Ellinikon, el antiguo aeropuerto y una de las mejores localidades costeras cerca de Atenas.

El problema, no obstante, es que los argumentos que el tribunal aceptó en su fallo contra la privatización eran objeciones técnicas sobre el uso actual del terreno. En el caso de Kassiopi, por ejemplo, la sentencia en contra de la venta se basaba en la presencia de una base militar, una objeción que el Gobierno superó reubicando la base militar para que la privatización pudiera seguir adelante. Por lo tanto, hasta que no se emita el fallo formal, no está claro si la sentencia se hará eco del argumento general en contra de la privatización, basado en la protección del patrimonio común.

Nadia Valavani, una diputada que ha estado al frente de la campaña parlamentaria, teme que el Consejo de Estado limite su sentencia contra la privatización a las infraestructuras de las empresas públicas, por lo que el agua no quedaría protegida.

Nadia también ha estado muy activa en otra iniciativa a escala europea que persigue que el agua sea reconocida como un derecho humano y un bien común. Al igual que la campaña ‘Salvemos el agua griega’, la iniciativa europea ha logrado traducir la fuerte defensa popular del agua en una cuestión de protección legal de los bienes comunes.

Con el formato de una Iniciativa Ciudadana Europea –el mecanismo que permite a la ciudadanía de la UE plantear un proyecto de legislación

comunitaria si se consigue recoger un millón de firmas de al menos siete países de la Unión—, se invitó a la Comisión Europea a “presentar una propuesta legislativa para la implementación del derecho humano al agua” y, entre otras medidas de protección, “se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización”.

Los sindicatos de los servicios públicos desempeñaron un papel fundamental en la campaña, que logró reunir 1.857.000 firmas y que se ha convertido en la primera Iniciativa Ciudadana Europea en activarse.

En octubre de 2013, los comisarios europeos Michel Bernier y Olli Rehn manifestaron que se debía acabar con la privatización del agua. Varios Gobiernos han coincidido con ello, al menos formalmente. Por ejemplo, los dos partidos del Gobierno de coalición alemán, el Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Demócrata Cristiana (CDU), han firmado un acuerdo para proteger el agua como un derecho humano. Pero en Grecia, donde el papel de la UE (como integrante de la troika) podría ser decisivo, la UE no está poniendo freno a la ofensiva privatizadora.

Una vez más, el movimiento de pinza sin precedentes generado con la lucha popular y la acción legal está siendo bloqueado por el Gobierno griego. Nadia Valavani ha intentado desbloquear el proceso, o por lo menos utilizar su plataforma parlamentaria para llamar la atención sobre el éxito europeo de la Iniciativa Ciudadana sobre el agua.

En dos ocasiones, Nadia ha tratado de usar un procedimiento parlamentario por el que se puede presentar una pregunta a un ministro o ministra en una sesión plenaria del Parlamento griego y lograr una discusión de diez minutos que puede



El teniente del alcalde de Ellineko y un voluntario en la clínica comunitaria gratuita establecida por la municipalidad como una respuesta urgente mientras se cortan los recursos de los servicios públicos de salud en Grecia.

atraer publicidad sobre un problema y, de este modo, ejercer presión sobre el Gobierno para que actúe. Nadia preguntó al ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, cómo tiene previsto aplicar la legislación europea para proteger el agua como un bien común, algo logrado a través de la iniciativa. En ambas ocasiones, y a pesar de disponer de previo aviso, el ministro decidió no estar presente en el Parlamento. “Siempre que existe la posibilidad de algo bueno, desde nuestro punto de vista, todo se bloquea”, comenta Nadia con voz fatigada. Ya ha agotado las cuatro oportunidades que tiene de someter un asunto al ministro este año. “Pero en enero comienza otro año”, dice con determinación, “y quizá podamos volver a empezar”.

Como campaña que sigue en curso, los resultados y las lecciones de la experiencia griega aún no se pueden determinar. Sin embargo, hay otras experiencias, en el norte de Europa, que a pesar de desarrollarse en condiciones distintas ofrecen buenos motivos para que el pueblo griego siga confiando en que se pueden crear nuevas instituciones democráticas para gestionar recursos comunes.

En las próximas páginas estudiaremos en detalle otros dos casos por las lecciones que ofrecen para el futuro: el gobierno municipal de Newcastle, en el norte de Inglaterra, y el proyecto Municipio Modelo en Noruega. También repasaremos el proceso de retorno a la propiedad pública que se está viviendo tras el fracaso de la privatización en Francia y Alemania.

2. Gobierno municipal de Newcastle: un laboratorio para el cambio en el servicio público

En el año 2009 tuve la suerte de poder estudiar, desde dentro, un proceso consciente de reforma de los servicios públicos. Después de que la sección local del sindicato UNISON ganara una ardua lucha contra la privatización de los servicios de informática y afines por parte del gobierno municipal, los sindicatos empezaron a trabajar con la administración sobre un programa negociado para mejorar el servicio.

Este servicio estratégico –aunque permanezca ‘en la trastienda’– incluye, entre otras cosas, sistemas para recaudar los impuestos municipales, asignar las prestaciones sociales y facilitar el acceso a los servicios públicos. Lo que dio a este proceso su carácter especial fue el orgullo de transformar estos servicios básicos por parte de las personas que participaron en él, así como la base democrática sobre la que se acordaron y se pusieron en práctica los cambios.

“No es que hubiera resistencia

al cambio”, explica Tony Carr, por entonces representante de UNISON para el personal implicado en estos servicios. “Se trataba de controlar tu propio destino y no tener a alguien que viniera y nos gestionara en el proceso de cambio.” Esta iniciativa de reforma tan explícita y de carácter público creó un laboratorio ideal para poner a prueba y elaborar la hipótesis de que la democratización, y no la privatización, es la mejor vía para modernizar y mejorar los servicios públicos. Y además de esto, mi intención era también explorar los mecanismos de cambio cuando este se ve impulsado por objetivos democráticos y no de lucro.

En defensa de lo público: una campaña estratégica

Lo que estaba en juego para la compañía involucrada en la privatización del servicio en Newcastle era un contrato de 11 años y 250 millones de

libras esterlinas. Para el personal y el sindicato, se trataba de 650 empleos, además de la calidad de unos servicios estratégicos de los que dependían muy directamente otros departamentos del gobierno municipal.

La estrategia de la sección de UNISON para seguir este programa de reforma interna, decididamente impulsado desde la esfera pública, constaba de cinco elementos esenciales, que se convirtieron en piedra angular para la democracia del proceso de transformación propiamente dicho:

1. Partiendo de una tradición de organización participativa, la prioridad pasaba por implicar a los afiliados y afiliadas en todos los pasos de la campaña: desde las reuniones colectivas y la elección de representantes cuando se anunció por primera vez ‘el análisis de mercado’ hasta las acciones laborales contra la privatización, pasando por el examen de la



La seccional de UNISON en el Ayuntamiento de Newcastle estableció una ‘alianza de servicios públicos’ en toda la ciudad para contrarrestar el ataque concertado del gobierno contra los servicios públicos, con una defensa positiva de la prestación pública.

oferta privada y la elaboración de una propuesta interna.

2. El segundo elemento de la estrategia consistió en intervenir en el proceso de licitación y hacer campaña a favor de una propuesta interna eficaz. “Tuvi- mos que reconocer que, aunque estábamos en contra de todo el concepto de ‘análisis de mercado’, si queríamos lograr el éxito de la propuesta interna debíamos intervenir en ese nivel desde el principio”, explica Kenny Bell, entonces coordinador de la sección de UNISON en Newcastle.
3. Hacer campaña significó, entre otras cosas, conectar con el público y construir el apoyo popular contra la privatización. ‘Nuestra ciudad no está en venta’ rezaba la pancarta que encabezó varias manifestaciones de sindicatos, organizaciones comunitarias y concejales laboristas disidentes.
4. En cuarto lugar, aunque el sindicato llenó un vacío político en su resistencia a la privatización, UNISON no quería tomar las decisiones finales sobre quién debería de suministrar los servicios (como tampoco quería que lo hicieran los y las gerentes de ese servicio). La presión sobre las esferas políticas terminó dando sus frutos y, finalmente, el gobierno del municipio aprobó una resolución en que se insistía que era necesario buscar alternativas a la privatización.
5. Hacer campaña hubiera servido de poco a no ser que esta se hubiera basado en estudios y argumentos estratégicos. Un elemento clave del éxito de la sección de UNISON en Newcastle fue el trabajo del Centro para los Servicios Públicos (CPS) y su método participativo de trabajo, con el que comparte habilidades y principios intelectuales. Para Lisa Marshall, delegada de UNISON y trabajadora de vivienda social, la colaboración con el CPS para estudiar la oferta del rival del sector privado representó un punto de inflexión: “Al analizar su oferta, encontramos muchas cosas que sabíamos que se podrían hacer mejor. A partir de en-

tonces, me sentí segura sobre lo que estábamos intentando hacer para mantener la gestión interna del servicio”.

Esto nos lleva al último componente del planteamiento de esta sección de UNISON: la dirección trató a los y las integrantes del sindicato como personas cualificadas que se preocupan por su trabajo. Josie Bird, que preside la sección, lo explica así: “Reconocemos que nuestros afiliados y afiliadas desean suministrar un servicio. No es la idea romántica de que viven para trabajar. No, trabajan para vivir, pero sí que importa el hecho de que trabajan para un servicio público”.

La campaña fue todo un éxito. La propuesta interna, elaborada por la gerencia en colaboración con los sindicatos, aportaba claramente un mejor valor público.

En 2002, el gobierno del municipio, que por aquel entonces era laborista (desde 2004 es demócrata liberal) dio el visto bueno y asumió un crédito de 20 millones de libras para invertir en el servicio, contando con que el ahorro compensaría con diferencia esa inversión. Algunos puestos de trabajo desaparecerían, pero sin despidos obligatorios y con importantes recursos destinados a la formación y la redistribución interna del personal.

La fuerza sindical es vital para la reforma democrática

Para apostar por el cambio, es necesario aunar fuerzas. El proceso de mejora implicó un cambio en la naturaleza de la gestión, que pasó de basarse en ‘el mando’ a basarse en ‘la capacitación’. Surge así un nuevo tipo de organización del sector público, con un papel de liderazgo que pasa más por la facilitación y el desarrollo de una dirección compartida y menos por el ejercicio del control. La iniciativa y la responsabilidad se han alejado del centro y los diversos niveles de supervisión se han eliminado y se han sustituido por mecanismos de apoyo. El dinamismo del departamento radica en que trabaja en distintos ámbitos mediante grupos de proyecto, propiciando que todas las personas con un determinado interés en un problema puedan reunirse para intentar solucionarlo.

La campaña del sindicato contra la privatización sentó las bases para la participación real del personal en el proceso de cambio. El sindicato se involucró en todas las etapas, desde la selección de nuevos gerentes a la discusión de todos los cambios importantes. “Es nuestro deber que la dirección rinda cuentas, no tanto de cara al personal, sino de cara al cambio”, comenta Kenny Bell.



Kenny Bell de UNISON, dirigente de la lucha en Newcastle.

Ray Ward, el gerente que dirigió los cambios, se hace eco de ello desde el punto de vista de la dirección. “El sindicato nos mantiene sinceros”, afirma. Se trata de una relación de colaboración, pero el sindicato ha mantenido su poder para actuar de manera independiente y acentuar el conflicto de ser necesario; el sindicato no gozaría de la confianza de sus integrantes si no pudiera hacerlo. Y la dirección lo sabe. El resultado es un experimento de democracia laboral con beneficios reales en términos de calidad de los servicios y de buena asignación de los fondos públicos.

- Una condición previa de la democracia laboral que entraña este proceso ha sido una visión común de unos servicios públicos de alta calidad y suministrados desde el ámbito público. Este objetivo común sirvió de base para la motivación y el propósito común: un punto de referencia mutuamente aceptado para evitar la deriva y ayudar a superar el conflicto. También permitió a la dirección y al sindicato poder seguir avanzando en el proceso constantemente.
- En esta cultura revitalizada del servicio público había un componente financiero, pero el objetivo era maximizar el beneficio público y no las ganancias. Una vez más, la naturaleza marcadamente pública del proceso de transformación puso de relieve esta distinción en todas las relaciones clave. En varias ocasiones pregunté al personal de Newcastle qué habría significado que esta relación se hubiera mantenido con una empresa privada y no internamente. Y por lo general, la respuesta era que habría supuesto todo tipo de costes adicionales –para hacer cambios con los que responder a las necesidades o los problemas no previstos en el contrato original– y un tiempo considerable destinado a negociarlos. Este es uno de los costes de la privatización.
- Las reformas del servicio en Newcastle ilustran, de forma modesta pero práctica, cómo el sector público puede tener sus propios criterios y mecanismos de eficiencia, muy distintos de los objetivos del lucro. Esta historia también demuestra que, con una visión clara y compartida, una gestión equitativa y profesional, un sindicato fuerte y democracia en el lugar de trabajo, el sector público dispone de la capacidad para administrar con eficacia el dinero público. En particular, puede hacer efectivo uno de sus activos más especiales: el del compromiso de su personal cualificado con el servicio a sus conciudadanos. Este es precisamente el activo que se desperdicia con la privatización.
- Una ampliación de la idea de reforzar el control democrático local sobre el dinero público se ha centrado en el fortalecimiento de la participación ciudadana. La experiencia de Newcastle lleva nuestros planteamientos acerca de la democratización aún más lejos, al abrir y democratizar los procesos internos, normalmente ocultos y que se dan por supuesto, de la gestión de los recursos públicos. Mientras las organizaciones internas del sector público tengan estructuras verticales, estén fragmentadas y permanezcan parcialmente ajenas al verdadero potencial de su personal, por mucha democracia participativa que se intente desarrollar, esta se verá absorbida y desactivada o bloqueada por las estructuras jerárquicas y los procedimientos burocráticos. El proceso de democratización interna, por lo tanto, es algo esencial.

3. Noruega y el Municipio Modelo

El movimiento sindical noruego, especialmente el sindicato de trabajadores y trabajadoras municipales Fagforbundet, tiene una verdadera perspectiva práctica del vínculo entre la derrota de la privatización y el logro de un cambio democrático interno en la organización de la administración pública.

En 1994 se produjo un giro en el programa de Fagforbundet y se pasó de esperar a que las cosas salieran lo mejor posible ante la ofensiva de la privatización a liderar con firmeza la lucha contra esta. Y es que el sindicato se encontraba constantemente cuestionado por la gente, que le

preguntaba: “Sabemos en contra de lo que estáis, ¿pero por qué apostáis entonces?”.

De modo que aceptaron el reto de demostrar, en palabras de Jan Davidsen, uno de sus dirigentes, que el sindicato “tiene la determinación visionaria para desarrollar los municipios de forma que estos sean aún mejores proveedores de servicios, en consonancia con las nuevas necesidades de organización, las nuevas tareas y las nuevas necesidades de servicio de los vecinos”.

El experimento se bautizó con el nombre de Municipio Modelo. Desde el principio, la iniciativa se basó en

experimentos reales para los que se ofrecían voluntariamente los municipios, partiendo de la premisa de que, durante su desarrollo, no tendría lugar ningún proceso de licitación. Desde entonces, se ha extendido a más de 150 localidades.

El experimento

El proyecto establecía varios supuestos y, leerlos parece, en cierta manera, una lista sistematizada de varios aspectos de la experiencia de Newcastle.

En primer lugar, se presume que en el proceso existe igualdad entre

quienes participan en el cambio organizativo: gerentes, clase política y plantilla. Tal como se define en el acuerdo del Municipio Modelo: “Aquí no se invita a nadie que ya haya tomado una decisión. Las ideas y visiones, así como las propuestas de medidas concretas, serán el resultado de procesos en los que haya participado todo el mundo”.

En segundo lugar, los trabajadores y las trabajadoras del sector público son vistos como motores de cambio, que trabajan con la población usuaria de servicios específicos, escuelas, guarderías, etcétera. El reto está en cómo desencadenar ese cambio. Y esto nos lleva al tercer supuesto: que el proceso necesita apoyo, aliento, conocimientos adicionales y transparencia para dar seguimiento a las ideas de los trabajadores y las trabajadoras.

En la ciudad de Trondheim, donde una alianza política de izquierdas se hizo con el gobierno asumiendo un manifiesto sindical, están utilizando una versión del sistema del Municipio Modelo para cuestionar las viejas jerarquías. Visité la sede organizativa del proyecto para ver de primera mano cómo funcionaba. La visita supuso reunirme con Rolv Erland, un dinámico joven que acababa de volver de trabajar en Palestina, y su equipo de 30 ‘guías para el cambio’ o ‘consultores para el cambio’.

El trabajo de las personas que ejercen de guías consiste, durante un día a la semana, en animar a los trabajadores y las trabajadoras a presentar ideas, organizar debates y garantizar que se dé seguimiento a esas ideas hasta convertirlas en decisiones.

Durante mi visita, tuve la oportunidad de hablar con dos guías para el cambio: Karin, una enfermera, y Siw, una profesora. Los y las guías pueden presentarse de forma voluntaria desde cualquier departamento del gobierno municipal y conseguir horas libres del trabajo para formarse y colaborar con distintos grupos de trabajadores y trabajadoras. Así, en lugar de centrarse en sus propios departamentos, se implican en otros servicios; la teoría es que esto les ayuda a tener una visión fresca de la situación sin confundirse demasiado con pequeños detalles.



El sistema noruego del Municipio Modelo involucra a las trabajadoras y los trabajadores en la mejora de los servicios, con resultados impresionantes.

La diferencia está en el seguimiento

Les pregunté a Karin y a Siw qué les estaba pareciendo el proceso. ¿Se presentaba la gente con ideas de cambio? “La gente no es tímida”, me comenta Karin, “pero ya les han preguntado su opinión en otras ocasiones y nunca pasó nada. La diferencia ahora es que le daremos seguimiento hasta que haya un resultado”. Siw añade: “Están empezando a sentirse a gusto haciendo sugerencias. Saben que mantendrán una implicación con lo que pase con sus ideas. No se usarán en su contra”. Al igual que en Newcastle, la participación de los sindicatos en el proceso da garantía de ello. Esta es, por lo tanto, una importante lección que aprender de Trondheim y de Noruega más en general.

El marco del Municipio Modelo se llama ‘el tripartito’, un término que suena bastante burocrático. Pero la realidad es que las reuniones donde se dan cita representantes políticos, gerencia y representantes de trabajadores y trabajadoras son para decidir medidas que apoyen las propuestas que vienen de abajo y dar seguimiento a las consecuentes repercusiones presupuestarias. Teniendo en cuenta que no hay consultorías de por medio,

ya se ha conseguido ahorrar en una partida.

Anne-Grethe Krogh, una de las artífices del proyecto Municipio Modelo, también me dio algunos ejemplos de importantes ahorros conseguidos con la disminución de las bajas laborales, ya que los trabajadores y las trabajadoras sienten ahora una mayor motivación por su trabajo. En un caso extremo, las bajas laborales habían caído del 11 al 2 por ciento. “Sin embargo”, puntualiza, “el centro de atención no está en el dinero, sino en mejorar la calidad del servicio.”

El de Noruega no es un modelo perfecto. Si bien ha sistematizado la democracia laboral y la apertura de nuevos canales para la participación de trabajadores y trabajadoras, ha desarrollado mucho menos los mecanismos para implicar a la ciudadanía que usa los servicios en sus procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, su impacto ha sido duradero. Esta alternativa sindical a la privatización se convirtió en fuente de inspiración y presión para la formación de una coalición de partidos de izquierda que ganó las elecciones generales de 2005 y comenzó a dar marcha atrás en los procesos de privatización y concesión de servicios a compañías privadas en el país.

- Al igual que con la experiencia de Newcastle, pero de una manera generalizada y sistemática, el Municipio Modelo construye una dinámica permanente de innovación y mejora en los servicios públicos como respuesta a las necesidades que van surgiendo. Se trata de una dinámica alimentada por el conocimiento y el compromiso de las y los proveedores de primera línea y de las y los usuarios. El sistema tripartito en que se organiza también ofrece un marco para desarrollar una visión estratégica del cambio.
- Esto es importante porque un punto destacado y aún presente en el contexto del auge de las privatizaciones es el límite de la capacidad del sector público, tal como se construyó originalmente, para innovar y mejorar. Hay muchos ejemplos de mejoras impresionantes en ser-

vicios públicos, pero sus formas organizativas jerárquicas han limitado tradicionalmente su capacidad de respuesta ante necesidades cambiantes y crecientes. Esto los ha hecho en ocasiones vulnerables a las críticas que sostienen que el sector privado es más eficiente. En la realidad, y por numerosos motivos, estas críticas han demostrado ser falsas una y otra vez. La lógica del lucro simplemente no se corresponde con los imperativos de las necesidades sociales y los derechos humanos. Pero el reto de crear mecanismos de innovación y mejora en los servicios públicos sigue vigente y, por ese motivo, el Municipio Modelo constituye un ejemplo importante, sistematizado y de sobrado éxito, de cómo alcanzar este objetivo.

Remunicipalización: la nueva tendencia

La cuestión de la eficiencia pública se está convirtiendo en un factor de peso en la inversión de la tendencia a la privatización y otros tipos de externalización en el gobierno local.

Según un estudio de David Hall para la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), existen claros indicios de que los municipios siguen avanzando hacia la 'remunicipalización' en lugar de la privatización en varios países europeos, como Alemania, Francia y el Reino Unido.

El estudio cita una investigación, publicada por la Universidad de Leipzig en 2011, que analizó más de 100 municipios alemanes y que llegó a la conclusión de que la tendencia apunta a un mayor suministro del sector público. En Francia, la tierra natal de las grandes compañías privadas de agua, son cada vez más los municipios y regiones, entre los cuales París, que están remunicipalizando los servicios de agua y el transporte público.

Incluso en el Reino Unido, donde el Gobierno central sigue promoviendo las privatizaciones en el sector de la salud y en las cárceles, y exigiendo recortes en el gasto de los gobiernos locales, los municipios están volviendo a asumir la gestión de los servicios como forma de ahorro. Incluso el diario Financial Times ha sugerido que las autoridades locales se muestran

cada vez más escépticas sobre el ahorro que puede ofrecer la externalización de los servicios y que sienten un creciente temor ante la posible reacción en contra de las empresas privadas por conseguir grandes ganancias a costa de los y las contribuyentes.

Resulta muy revelador que esta tendencia se esté produciendo en el contexto de los recortes generalizados en el gasto público en toda Europa, lo cual apunta al hecho de que, en la práctica, cuando se deja de lado la ideología del mercado, la idea de que "privado equivale a eficacia" no es más que una falacia.

A veces, sin embargo, la remunicipalización es el resultado de una decisión política o administrativa, cuando un contrato se debe renovar o cuando las personas encargadas de la gestión consideran que la externalización, en realidad, no beneficia a los intereses del municipio. En algunos casos, señala David Hall, esta decisión puede crear tensiones con los sindicatos, que no quieren que los trabajadores y las trabajadoras vivan la incertidumbre que supone el cambio de dirección para que la compañía en cuestión vuelva a depender del sector público. En algunos casos incluso las empresas privadas implicadas pueden intentar sacar provecho de esta situación.

En la ciudad francesa de Lodève,

por ejemplo, el ayuntamiento decidió poner fin a un contrato privado para la limpieza de las calles y remunicipalizar el servicio en 2009. Los trabajadores y las trabajadoras se declararon en huelga, con el apoyo de la propia empresa privada. Sin embargo, después de una reunión con el alcalde, donde se les explicó que se respetaría su derecho al traslado del puesto laboral, volvieron a su actividad y el servicio se remunicipalizó.

Una forma mucho mejor de hacer las cosas, por supuesto, es cuando las campañas sindicales y ciudadanas impulsan la remunicipalización, obligando a que se considere la eficiencia de la empresa privada desde el punto de vista del interés público. En la ciudad alemana de Stuttgart, esto supuso un choque frontal entre el gobierno municipal de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que había vendido efectivamente servicios básicos, y el sindicato de los servicios públicos verdi, en colaboración con una fuerte coalición de ciudadanos y ciudadanas. Este conflicto contribuyó a un cambio de gobierno, formado por una coalición rojiverde del Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes, Die Linke y el partido local Stuttgart Ökologisch Sozial, que más tarde remunicipalizó los servicios.

Nuevas bases para una economía del beneficio público

Las experiencias que hemos recogido hasta ahora comparten ciertas características que las convierten en precursoras de un nuevo tipo de sindicalismo. No podemos conocer todos sus detalles –ya que aún están en fase de creación a través de esas luchas–, pero podemos analizar sus bases para seguir construyendo a partir de ellas.

Para empezar, en todas estas luchas contra la privatización de los servicios públicos, los sindicatos han ido más allá de la defensa de sus propios puestos de trabajo y condiciones laborales para asumir la responsabilidad de defender una empresa o servicio público y, además, democratizar la forma en que se gestiona. El objetivo de que la empresa o servicio rindiera cuentas, fuera transparente y respondiera a las necesidades ciudadanas se convirtió en un elemento más de la resistencia. Otra característica común de todas estas experiencias es el papel del sindicato y la alianza entre sindicato y comunidad para organizar y compartir los conocimientos y las habilidades de los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos, así como de las personas que los usan. Estos conocimientos han constituido la base para desarrollar formas alternativas de organizar el servicio, guiadas en diversos grados por los principios de la equi-

dad, la creatividad del trabajo, la capacidad de respuesta ante la comunidad y la plena rendición de cuentas y transparencia.

Al explorar el tema con más detenimiento, en muchos de estos casos se encuentra que los sindicatos se vieron influidos por tradiciones culturales y organizativas que ven a los trabajadores y a las trabajadoras no solo como asalariados, sino como personas con conocimientos. Estas dinámicas políticas más generales no proceden simplemente de la organización en el lugar de trabajo ni de la organización sindical en sentido estricto. Ya sea por el compromiso con la democracia participativa característica del movimiento obrero brasileño, el sindicalismo que influyó en la formación del SAMWU, las tradiciones de solidaridad entre la clase obrera que siguen gozando de buena salud en Newcastle o las tradiciones socialdemócratas radicales de Uruguay, estos sindicatos tienen conciencia de sí mismos como actores de una agenda por la justicia social más amplia. La pregunta, que responden en la práctica las campañas y las coaliciones recogidas en este cuaderno, está en qué tipo de organización y estrategia desarrollan y respaldan mejor esta autoconciencia.

Reconocer la creatividad del trabajo para satisfacer las necesidades sociales

Para entender con estos ejemplos cómo los sindicatos han asumido conscientemente la responsabilidad del propósito social del trabajo de sus afiliados y afiliadas, y han establecido alianzas con las personas que usan los servicios, cabe recordar la concepción de Karl Marx sobre el carácter dual del trabajo en el capitalismo. (Mi objetivo en las páginas que siguen es profundizar en la caja de herramientas teóricas en busca de algún instrumento cortante que nos permita salir del marco neoliberal y crear una perspectiva que sirva para generalizar a partir del tipo de iniciativas que hemos estado analizando para defender la gestión pública y democrática de los servicios públicos, pero no me ofenderé si alguien prefiere saltarse

este apartado.) Marx argüía que el trabajo en el contexto del mercado capitalista es ‘abstracto’ y, a la vez, ‘concreto’. Por un lado, es abstracto porque entraña producir mercancías que se intercambian en el mercado por dinero y del que el empresario extrae beneficios y paga salarios. Pero nuestro trabajo también es concreto en la medida en que produce bienes materiales o servicios con una utilidad específica.

Lo relevante por la luz que esto arroja sobre las luchas actuales a favor de alternativas a la privatización es que existe una diferencia entre dos tipos de valor: el valor de cambio del trabajo abstracto y el valor de uso del trabajo concreto. Estos están en constante tensión: la producción del valor

de uso es el trabajo creativo potencialmente útil que –como sucede con el capitalismo–, cuando su producto se convierte en una mercancía y en fuente de beneficio privado, se subordina a la disciplina que impone el empleador de producir valor de cambio y maximizar el beneficio.

En la lucha contra las privatizaciones, esta tensión se agudiza especialmente cuando aquellas personas que defienden los servicios públicos prestados públicamente lo hacen en términos de la utilidad pública o de la necesidad social del servicio. (Y no solo en términos de puestos de trabajo y salarios, separados de su importancia para la calidad –o ‘valor de uso’– del servicio.)

La cuestión aquí es que los ser-

vicios públicos financiados y suministrados desde la esfera pública son actividades económicas que han sido parcialmente apartadas del mercado capitalista. Y en tanto que instituciones no mercantiles y al menos formalmente democráticas, se rigen por objetivos políticos y sociales, y la economía de su organización se basa en la asignación de presupuestos (limitados por los niveles de impuestos y, por lo tanto, por los niveles de ingresos públicos). Se trata, en esencia, de un arreglo económico muy distinto del de una empresa capitalista.

La particularidad del sector público desde el punto de vista de la organización del trabajo no ha sido, por lo general, muy evidente. Sus medidas de eficiencia tampoco han sido normalmente muy sensibles a consideraciones como el beneficio público, la calidad de las relaciones con usuarios y usuarias o la naturaleza del servicio. En el nombre de un cierto concepto de eficiencia, muchas veces copiado del sector privado, el sector público se dedicó a reproducir las prácticas de 'línea de producción' del capitalismo privado, donde a cada trabajador o trabajadora se le asigna una tarea pequeña y repetitiva, y no se le concede ninguna oportunidad de usar su creatividad y conocimiento laboral para dar forma al conjunto. Así, el punto importante es que los trabajadores y las trabajadoras están alienados de su propia actividad productiva.

Del mismo modo, en lo que respecta a las respuestas sindicales antes de que se generalizara la privatización, las rutinas del sindicalismo que, por lo común, se daban por sentado en el sector público parecían estar basadas en las del sindicalismo del sector privado, con la excepción de que el empleador no era el capital, sino un



Los sindicatos de la ISP en Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Liberia y Sierra Leona han establecido una red transfronteriza que apunta a mejorar la capacidad de los sindicatos y de las y los trabajadores de la salud para promover y prestar servicios públicos de calidad.

Gobierno o un ayuntamiento.

Si bien los sindicatos del sector público han solido desplegar fuentes de poder de negociación propias de la naturaleza institucionalmente política de los contratos de empleo de sus afiliados y afiliadas –movilizar a la opinión pública, utilizar los vínculos entre partido y sindicato, etcétera–, solo de forma excepcional han hecho del carácter, la organización y el futuro del servicio como tal un elemento clave del contenido de sus campañas.

Las estrategias sindicales centradas en desarrollar o reformar radicalmente los servicios públicos –normalmente en estrecha colaboración con sus conciudadanos y conciudadanas– comenzaron a aparecer en respuesta a la privatización y otras formas de mercantilización de lo que hasta entonces había estado, total o parcialmente, fuera del mercado capitalista. Estas estrategias de reforma radical crean una dinámica en la que la lucha contra la privatización no

solo gira en torno a la titularidad pública frente a la privada, sino también en torno al control democrático del proceso laboral y los fines del trabajo, incluida la accesibilidad y la calidad del propio servicio.

La idea del carácter dual del trabajo implica que lo que estamos viendo es que las prioridades del sindicalismo del servicio público se extienden más allá del valor de cambio (por ejemplo, de las cuotas pagadas por afiliados y afiliadas o su horario laboral) para abarcar una preocupación explícita por el valor de uso (por ejemplo, la calidad del servicio público prestado). Este compromiso con el propósito y la calidad del servicio siempre ha sido característico de los trabajadores y las trabajadoras del servicio público. Sin embargo, lo importante aquí es que en estas luchas transformadoras contra la privatización, este se convierte en un tema central en torno al que se están organizando los sindicatos del sector público.

Democracia participativa y control obrero

Las luchas en torno al carácter del sector público no son nada nuevo. Durante aproximadamente los últimos 40 años, movimientos y luchas de todo tipo han intentado que los procesos para fijar los objetivos del servicio público fueran más democráticos, contarán con una mayor participación del público y, por tanto, respondieran mejor a las necesidades y expectativas

de este. Desde los movimientos estudiantiles, feministas y urbanos de los años sesenta y setenta hasta los experimentos de democracia participativa de los años ochenta y los movimientos por la justicia ambiental del siglo XXI, se ha vivido una creciente presión para que ese público real y concreto sea una presencia fuerte en los procesos de toma de decisiones públicas.

Pero esos movimientos raramente se centraron en el papel del trabajo en el proceso de democratización que perseguían. Entender la lucha contra la privatización como una potencial lucha por el valor de uso nos ayuda a superar esta limitación estratégica. La defensa de la naturaleza parcialmente desmercantilizada de la esfera pública abre distintas posibilidades para lu-



Miembros de STAL Portugal marchan en protesta contra los planes de austeridad y la privatización de los servicios municipales.

char contra el trabajo alienado.

En concreto, abre la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos puedan expresarse a través de su trabajo, en la prestación de servicios a la ciudadanía, como personas con conocimientos y sentimientos, y no solo como personas que venden su fuerza de trabajo – su creatividad– como si fuera una mercancía.

Que los trabajadores y las trabajadoras puedan expresar los valores del servicio público a través de su trabajo no es necesariamente fácil, en parte debido a las jerarquías y las estrategias de control de la gerencia y, en parte, porque los sindicatos suelen limitar su papel, sobre todo frente a los recortes concertados, a una actuación defensiva y centrada exclusivamente en proteger los salarios y las condiciones laborales. Tampoco apoyan y alientan necesariamente a los trabajadores y las trabajadoras para que denuncien prácticas de mala gestión o hagan un esfuerzo extra para ofrecer una buena atención.

Pero cuando los sindicatos luchan contra la privatización, para mantener el servicio en el marco de la economía pública, donde la prioridad está más en la atención y no tanto en el comercio, este acento en el valor de uso del trabajo de servicio público suele pasar a primer plano. Es el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras con el propósito de su trabajo lo que apun- tala ese giro de la lucha simplemente para defender los salarios a la lucha por un servicio en beneficio de todos y todas.

Estas luchas contra la privatización, basadas en que los trabajadores y las trabajadoras insisten efectivamente en que tienen un determinado control –junto con el resto de la ciudadanía que utiliza su fuerza de trabajo– apuntan a una profunda expansión del control democrático de los servicios públicos.

La idea de una participación más directa de la ciudadanía en la forma en que se administran los servicios públicos y en que se gastan los presupuestos públicos locales es algo ya familiar. En todo el mundo existen muchas experiencias de ‘presupuestos participativos,’ ‘planificación popular’ y varios modelos de participación directa en la gestión de determinados servicios. Pero lo que entraña el argumento que se expone aquí es que la profundización de la democracia y la idea de la ‘participación’ debe extenderse a una mayor participación de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones públicas, que implican cómo se utiliza su fuerza de trabajo. De esta manera, los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos pueden asegurarse de que su creatividad va en beneficio de la ciudadanía y florece en colaboración con ella.

Esto implica un enfoque totalmente nuevo con respecto a la división del trabajo y la gestión de los servicios públicos; un enfoque basado en la colaboración y la motivación, en lugar de una versión burocrática de la disciplina y las divisiones del mercado capitalista. Como novedad que no solo procede del fenómeno de la privatización, sino también del fracaso

del Estado autoritario –tanto socialdemócrata como soviético–, estas luchas pioneras podrían ser fuentes útiles de conocimiento para conseguir lo que podríamos denominar servicios públicos ‘socialmente eficientes.’

Sin embargo, cuando el sector público se enfrenta a la destrucción de los servicios públicos en nombre de la ‘austeridad’ se corren riesgos. Una de las respuestas de los Gobiernos neoliberales ha sido la de tratar de sobornar u obligar a los trabajadores y las trabajadoras a asumir modelos que no equivalen exactamente a una privatización, pero que son bastante más favorables a quienes abogan por ella. Un ejemplo de ello se ha dado en Gran Bretaña, donde el Gobierno conservador ha estado intentando (por lo general, sin éxito) que los trabajadores y las trabajadoras abandonen su empleo en los ayuntamientos mediante la creación de las llamadas ‘cooperativas’ y participando en las licitaciones para obtener contratos. Los sindicatos –y gran parte del público– consideran que esta constituye una forma, apenas velada, de privatización. Leer la letra pequeña de las propuestas conservadoras es como contemplar una represa de agua donde aparece una grieta. Lo que empieza con bonitas palabras sobre el poder de los trabajadores y las trabajadoras termina con la entrada de ‘expertos’ (es decir, de consultoras muy bien pagadas) y de ‘empresas conjuntas’ (compañías privadas). Cuando el sector público subcontrata a una empresa social se da una lógica parecida. Al principio no parece que se trate de una privatización, ya que la empresa asume un compromiso con fines sociales, pero la experiencia nos dice que el contrato pronto pasa a manos de una compañía privada, que puede concursar a un precio más bajo porque reducir los costes laborales es su máxima prioridad.

Cambiar la propiedad económica para que no dependa de intereses privados con fines de lucro, sino de cooperativas de trabajadores y trabajadoras y usuarios y usuarias, sería una excelente manera de transformar el sector del mercado para que este se aleje del capitalismo. Pero las estrategias para democratizar el sector público deben partir del reconocimiento de que los bienes públicos son algo distinto. Debemos conseguir que el

suministro de estos rinda cuentas por vías que no pasen necesariamente por el mercado, de forma que se reconozca su valor para todos y todas. Una opción propuesta en un informe encargado por UNISON es impulsar la

creación de cooperativas en servicios privatizados como un paso intermedio para volver al sector público en las compañías privadas contratadas. Sin embargo, es muy elocuente que la legislación del Gobierno británico

de coalición limite el apoyo de dicho Gobierno a las iniciativas de trabajadores y trabajadoras para crear cooperativas en el sector público.

Cooperación internacional para el beneficio público

Una forma cada vez más estratégica de construir una alternativa positiva y potente a la implacable ofensiva de las privatizaciones es la colaboración entre autoridades públicas, a menudo impulsada por sindicatos y movimientos ciudadanos, y apoyada por la investigación y el activismo, como la que se articula a escala internacional en la red *Reclaiming Public Water* (RPW).

En efecto, se han establecido ya más de 130 alianzas de este tipo, conocidas como ‘partenariados público-públicos’ (PUP en inglés) en 70 países. Muchos de estos partenariados son transnacionales o transfronterizos; normalmente, se saltan el ámbito nacional y vinculan directamente a dos entidades de distintos países, aunque es importante destacar que algunos PUP funcionan dentro de un mismo país y son un vehículo para construir y difundir victorias locales en un contexto donde el movimiento no es lo bastante fuerte como para enfrentarse al Gobierno central directamente. Una red de partenariados ayuda a generar una base sólida para demostrar la eficacia de la opción pública.

Gracias a estos partenariados, las entidades públicas pueden enriquecer el proceso de mejora, aprendiendo nuevas tecnologías, consiguiendo mayor acceso a fondos y practicando otros métodos de gestión y formación. En América Latina, los sindicatos que están trabajando sobre alternativas a la privatización están llevando adelante una iniciativa concertada para desarrollar PUP en todo el continente, basadas en los principios de la rendición de cuentas y la participación que han desplegado ya a escala local.

El importante papel desempeñado por los sindicatos para promover los PUP ilustra el carácter multinivel de las nuevas estrategias sindicales. Al mismo tiempo, el proceso de trabajar



Afiliadas y afiliados de la ISP de todo el mundo se movilizan durante las reuniones del Foro Global sobre Migración y Desarrollo en Nueva York.

a escala transnacional supone un importante desafío para los sindicatos cuya fuerza en la lucha por alternativas radica en el apoyo activo y la capacidad de sus afiliados y afiliadas en el centro de trabajo.

La FFOSE, en Uruguay, ha sido uno de los sindicatos que se ha situado al frente de la expansión de los PUP en América Latina. Adriana Marquiso señala que estos partenariados “pueden ser un tema que está lejos del día a día de los trabajadores”, por lo que es importante que los sindicatos tiendan puentes entre el nivel local de participación de los afiliados y afiliadas y el nivel internacional en que se suelen negociar los PUP. “Hemos debatido este tema en nuestras estructuras sindicales, hemos organizado talleres y conferencias con el objetivo de incorporar este proceso en nuestra organización”, explica. Marquiso, además, se muestra optimista en lo que respecta al éxito de la iniciativa: “En la FFOSE conta-

mos ahora con una nueva generación que ha asumido este tema con gran interés”.

Aquí, por lo tanto, tenemos dos dinámicas –distintas pero interrelacionadas– que se dan cuando trabajadores y trabajadoras y sindicatos se involucran en alternativas a la privatización: por un lado, una lucha por transformar el proceso administrativo y laboral en el sector público para maximizar el interés ciudadano y crear mecanismos de rendición de cuentas; por el otro, estrategias para construir contrapoderes a las presiones macroeconómicas ejercidas por el poder capitalista.

Se trata de dos dinámicas diferenciadas y que no siempre ocurren de manera simultánea. Pero las experiencias recogidas en estas páginas, que se ven apuntaladas por otras muchas, indican que las dos son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que una alternativa logre el resultado esperado.

Construcción de coaliciones

La visión que hemos planteado en los capítulos anteriores, la de los y las integrantes de los sindicatos como parte de la comunidad y como usuarios y usuarias, además de trabajadores y trabajadoras, que asumen el compromiso de ofrecer servicios de alta calidad, lleva a los sindicatos a trabajar en estrecha colaboración con las personas que usan los servicios y con la ciudadanía en general.

En todos los ejemplos que hemos explorado en este cuaderno, esas alianzas han sido fundamentales desde el punto de vista estratégico. Por un lado, han aglutinado en su seno distintas fuentes de conocimientos –prácticos, expertos y académicos– que eran de vital importancia para transformar la organización del servicio, su accesibilidad y calidad. Las asambleas locales y regionales que desarrollaron alternativas en la campaña brasileña, los planes para transformar la organización de la compañía estatal de agua OSE y la forma en que el proyecto de Hillstar dependía del conocimiento de las comunidades locales ilustran este proceso de construcción de un conocimiento alternativo o ‘contraconocimiento’. Lo mismo puede decirse de la colaboración internacional, ya sea a través de la ISP, la red RPW o directamente de forma transfronteriza, a veces entre regiones, que ha servido para intercambiar información y enfoques estratégicos no siempre disponibles a escala nacional.

Por otro lado, el éxito de estas alianzas –que consiguieron contrarrestar las presiones del poder financiero y empresarial global, y la conformidad del sistema político– se basó en su habilidad para utilizar diversas fuentes de poder e influencia para ganarse una gran legitimidad y generar apoyos políticos a favor de la opción pública.

Por ejemplo, la creación de una campaña municipal con gran confianza y pluralidad política en contra de la

privatización, bajo el lema ‘Nuestra ciudad no está en venta’, fue decisiva para ganarse a la mayoría de representantes políticos laboristas en Newcastle. Gracias a la campaña, se abandonó ese fatalismo que decía que no había espacio para las alternativas y una actitud defensiva sobre si el sector público podría realmente hacerlo mejor que el sector privado, y se comenzó a reconocer que el electorado no toleraría la privatización y que, por lo tanto, se debía estudiar seriamente la alternativa de los sindicatos.

Cuando se crearon, las alianzas entre sindicatos y comunidad que hemos repasado en este cuaderno abrieron nuevos horizontes. Hoy en día, la mayoría de sindicalistas estará de acuerdo con que no pueden detener la privatización en solitario. Aún así, nos enfrentamos a problemas estratégicos y prácticos a la hora de hacer realidad estas alianzas y combinar las distintas fortalezas de nuestros diversos aliados para construir el poder que necesitamos para ganar.



Representantes sindicales y aliados de la sociedad civil en un taller sobre agua pública organizado por la ISP durante el Foro Social Mundial en Túnez.

Saber qué se está moviendo en la comunidad

Una forma vital de formar alianzas consiste en mantener los oídos abiertos sobre lo que pasa en la comunidad y estar en disposición de apoyar las campañas comunitarias cuando surgen. Las protestas comunitarias sobre los problemas en el suministro de servicios –muchas veces como consecuencia directa o indirecta de su mercantilización– suele ir por delante de la resistencia sindical a las

causas de estos problemas.

A veces, las acciones se están desplegando en compartimentos separados. Así, mientras la comunidad protesta porque no se atienden sus necesidades, los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos protestan por el recorte de puestos de trabajo o de salarios, que socava su capacidad para prestar los servicios como desearían. Pero estas protestas

no conectan entre sí. En ocasiones, hay sindicalistas que incluso participan en las protestas a título individual, pero sin plantearse necesariamente como podría el sindicato hacer causa común con la lucha y con sus vecinos y vecinas. Los trabajadores y las trabajadoras también son usuarios y usuarias de los servicios, del mismo modo que los usuarios y las usuarias de los servicios también son trabaja-

dores y trabajadoras (muchas veces también del sector público).

En Sudáfrica, la federación sindical COSATU realizó en 2012 una encuesta entre sus bases, que demostró que el 24 por ciento de sus integrantes había participado en protestas comunitarias en los últimos cuatro años. Sin embargo, esto no se refleja en ninguna cercanía significativa de COSATU con las protestas. Este dato podría muy bien apuntar a una brecha

importante, no solo entre sindicatos y comunidad, sino también entre sindicatos y sus propios afiliados y afiliadas. En otras palabras, el problema de las alianzas con las comunidades también es un problema de la cultura interna y la organización del sindicato. Cabe celebrar, no obstante, que hay varios indicios de que se tiene conciencia del problema y existe voluntad de cambio.

Obviamente, las resoluciones

adoptadas en el Congreso del sindicato nunca son suficientes, pero sí cabe esperar un verdadero cambio cuando esas resoluciones van seguidas de la asignación de recursos y personas, no a ampliar la oficina central, sino a trabajar día a día con activistas de la comunidad. Actualmente, son muchos los ejemplos de iniciativas de este tipo en curso.

Desplegar a delegados y delegadas sobre el terreno

Tomemos dos de esos ejemplos: el del SAMWU en Sudáfrica y el de UNISON en Gran Bretaña. Ambos sindicatos reconocieron que su propio poder de negociación, basado en el lugar de trabajo, no bastaba de por sí para combatir la precarización y la subcontratación, y también que las comunidades eran capaces de movilizar otras fuentes de poder moral y político, incluido el disruptivo, que sería su equivalente a la huelga. Estos tipos de poder se debían aglutinar en pro de una misma causa.

Esa era la idea en la que se basó la sección del metro de Ciudad del Cabo del sindicato SAMWU al crear una red de delegados y delegadas para llegar a los grupos de la comunidad en que viven. Lennox Bonile, con quién hemos abierto las páginas de este cuaderno, está trabajando en el distrito de Khayelitsha como parte de esa red. Lennox se reúne con las organizaciones locales y consigue apoyos para una campaña del SAMWU que persigue que los empleos del Programa de Ampliación de las Obras Públicas (EPWP) sean permanentes y estén bien remunerados, y que a las personas que trabajan en él se les garantice una formación adecuada y se les proporcione la ropa de protección que necesitan para preservar la salud.

El trabajo del SAMWU con las comunidades también ha entrañado el apoyo directo a las protestas relacionadas con el suministro de servicios. El apoyo práctico proporcionado para la acción directa contra los cortes de electricidad por falta de pago es un buen ejemplo. Son integrantes del SAMWU quienes, como personal de primera línea, se encargan de ir a

las comunidades que protestan por las facturas. Muchas veces, son las mismas comunidades en las que viven y, por ese motivo, saben que pagar las facturas generadas por la política de recuperación de los costes del gobierno municipal y las malas condiciones de la vivienda significa que los niños y las niñas se van a la cama con hambre. En muchos casos, se han negado a hacer efectivos los cortes de electricidad y, en esos momentos, han contado con el pleno respaldo del sindicato.

La sección de UNISON en Newcastle compartía una perspectiva parecida. En primer lugar, identificó las comunidades en las que vivían delegados y delegadas de UNISON y, después, les apoyó para que se pusieran en contacto con los grupos locales y determinaran cómo podían colabo-

rar. Aquí, los delegados y delegadas actuaron como un primer puente entre el sindicato y la comunidad.

Al mismo tiempo, UNISON creó un nuevo puesto en el municipio, el de 'responsable de campañas comunitarias'. Entre sus funciones estaba dar seguimiento a esta nueva red de contactos y organizar el apoyo sindical en torno a las preocupaciones de la comunidad – como defender y mejorar las escuelas, los servicios sociales, los centros juveniles, la vivienda y la planificación urbanística– en que el sindicato y los grupos comunitarios tenían objetivos comunes. Esta iniciativa generó resultados que fueron más allá de las campañas inmediatas y, por ejemplo, también impulsó la lucha del sindicato en la ciudad contra el racismo y el partido fascista BNP.



La sección de UNISON en Newcastle estableció activistas de campaña y formó a representantes sindicales para tomar contacto con grupos comunitarios.

Abrir las puertas del sindicato a la comunidad

Un enfoque más formal para crear vínculos con la comunidad es la iniciativa de Unite, uno de los mayores sindicatos de Gran Bretaña, para abrir las afiliaciones a personas desempleadas, pensionistas, estudiantes y otras personas sin empleo. Por 50 peniques a la semana, poco más de medio euro, quienes están afiliados a las secciones locales de Unite obtienen ciertas ventajas prácticas, como el uso de la línea telefónica de ayuda jurídica del sindicato y servicios de asesoría sobre deudas e impuestos. Pero para las personas responsables de organización en estas secciones, los beneficios materiales (por bienvenidos que sean) son solo 'un adorno' en comparación con el potencial de empoderamiento que se deriva de la afiliación al sindicato.

"En estos momentos, la gente está fragmentada y buscando desesperadamente una salida", comenta Alex Halligan, secretario del Consejo de Oficios de Salford y uno de los impulsores de esta iniciativa, tanto a escala

central como local. "El sindicato ofrece una forma de acción concreta y colectiva." Y mientras que una persona que se enfrenta en solitario al recorte de las prestaciones para vivienda tiene pocas vías para hacerse oír y expresar "la terrible situación en que se encuentra", Halligan señala que "cuando tienes a mil personas que gritan juntas la misma consigna, es más fácil hacer llegar el mensaje".

El profesorado en la ciudad estadounidense de Chicago adoptó otro enfoque para trabajar en estrecha colaboración con la comunidad en el marco de una campaña de resistencia a los recortes de docentes y la introducción de reformas que consideraban que estaban allanando el camino para privatizar las escuelas, convirtiéndolas en escuelas semiprivadas (llamadas 'escuelas charter'). Sabían que, en última instancia, sería necesario llamar a la huelga, pero elaboraron un plan de dos años para hacer campaña y construir las bases de cara a ella.

Como todos los demás sindicatos de este cuaderno, ven su lucha como una batalla por la calidad de la educación que proporcionan y, por lo tanto, como un asunto que afecta a la comunidad, además de a su lugar de trabajo. Su punto de innovación consistió en organizar asambleas en cada escuela, en las que los padres y madres, los y las estudiantes, pudieran participar en el debate sobre la calidad de la educación e influir en el contenido y la organización de la campaña, lo cual demuestra en la práctica que el punto central de la lucha era la calidad educativa. Estas asambleas también hicieron más difícil que la clase política aislara al cuerpo de docentes, y que lo presentaran como si solo estuviera luchando por intereses sectoriales. Según una encuesta, el profesorado contaba con el apoyo de dos terceras partes de las familias.

Condiciones para el éxito de una coalición: algunas lecciones generales

En muchos países, tras décadas de constante difamación pública por parte de Gobiernos neoliberales de diferentes colores políticos, los sindicatos se encuentran en una posición bastante aislada. (Cabe recordar que gran parte del impulso inicial de la economía neoliberal pasó por debilitar a la fuerza laboral.) Así, entre los motivos tácitos que subyacen a la privatización, acabar con sindicatos del sector público ocupa un lugar destacado.

Por este motivo, construir relaciones duraderas de colaboración con los usuarios y las usuarias del servicio y las comunidades resulta especialmente importante. También resulta difícil. En un contexto de elevado desempleo y de grandes economías informales, los trabajadores y las trabajadoras del sector público se presentan como 'privilegiados' y, muchas veces, se les mira con desconfianza, como si solo estuvieran interesados en su propio bienestar, por mucho que afirmen lo

contrario. Los sindicatos, por tanto, han tenido que demostrar que mantienen un compromiso para con el público general, y que no solo buscan establecer alianzas instrumentales para proteger sus propios empleos.

Vale la pena tratar de resumir qué condiciones han facilitado la tarea de construir alianzas efectivas y duraderas, basándonos en las experiencias presentadas en este cuaderno y en las de otros estudios, como, por ejemplo, el útil trabajo de Amanda Tattersall, activista de un sindicato de docentes de Australia, sobre las coaliciones entre sindicatos y comunidades en Canadá y Australia.

Una primera condición que destaca en todas las experiencias es que el sindicato no intente hacerse con el control de la alianza en la que entra. El sindicato, más bien, debe estar dispuesto a integrarse en la alianza sin estar siempre al volante, lo cual representa un cambio significativo para muchos sindicatos, que están aprendiendo nuevos métodos de par-

ticipar en alianzas con otros tipos de organizaciones, ya sean movimientos sociales, ONG o iniciativas y redes, y experimentando con nuevas formas de comunicación, de organización y de toma de decisiones.

Las experiencias que se presentan aquí, especialmente en Brasil y Uruguay, demuestran que estos sindicatos actúan más como un recurso para una gran variedad de organizaciones que en lugar de reafirmarse como líder o centro único. También apuntan al reconocimiento de que todos nosotros y nosotras, las comunidades y los trabajadores y las trabajadoras del sector público, tenemos éxito o fracasamos juntos, aunque el mercado nos trate como individuos atomizados. Y hay varios ejemplos de sindicatos que han aprendido nuevas formas de organización y comunicación acudiendo a la nueva generación de activistas, en lugar de pensar que pueden innovar por cuenta propia. Este compromiso consciente para enriquecerse mutuamente e ir más



Sindicatos afiliados a la ISP y ONGs aliadas se han movilizado en protesta contra la privatización de los servicios públicos de agua en Indonesia.

allá del terreno conocido no es aún la norma en los sindicatos. Sin embargo, cada vez se entiende más que esta es una condición indispensable para que los sindicatos sean actores eficaces en el nuevo marco del 'turbocapitalismo' mercantilizado.

Otra de las características de la forma en que los sindicatos batallan junto con otros actores sobre una base que valora distintas fuentes de poder y capacidad pasa por el acento en la autodeterminación cooperativa. Se entiende que es algo fundamental para la eficacia de cualquier estrategia y es algo que se pone de manifiesto en la gran importancia que se concede a la educación de los trabajadores y las trabajadoras y la formación profesional.

Esta es una peculiaridad que comparten todos los sindicatos que se presentan en este capítulo. Y esto se logra, por ejemplo, reservando deliberadamente tiempo para la autoformación y actividades de sensibilización, como seminarios y talleres, solicitando estudios no a consultoras tradicionales y distantes, sino a investigadores e investigadoras comprometidos con los objetivos de la lucha, y entendiendo que el conocimiento de los y las activistas son necesarios para complementar el conocimiento que proviene de la investigación.

Este compromiso con la autoformación colectiva es también patente en la colaboración internacional. Por

ejemplo, cuando Abelardo de Oliveira Filho, dirigente de los trabajadores y las trabajadoras del agua, explica que "la ayuda y el intercambio internacional ha sido crucial en nuestra lucha", se está refiriendo, entre otros trabajos, a las investigaciones realizadas por la Internacional de Servicios Públicos, que asumió el mandato que le habían otorgado sus integrantes de oponerse a la privatización del agua y analizar "cómo funcionaban los privatizadores". Esto, a su vez, llevó a la creación de un centro de estudios especializado, la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), cuyo método –en línea con la filosofía de la propia ISP– reunió distintas formas de conocimientos y saberes de activistas, investigadores e investigadoras y organizaciones cívicas.

Otro rasgo que surgió en la creación de algunas de las coaliciones atañe a la relación entre la comunidad y el trabajo. Estas alianzas no establecían fuertes distinciones entre 'trabajo' y 'comunidad', como si fueran dos mundos separados. Estos movimientos tienen que ver, en parte, con construir nuevas formas de colectividad frente a las fuerzas desintegradoras de la economía neoliberal y, más en concreto, frente a la temporalidad y la precariedad del trabajo y la erosión de las formas tradicionales de solidaridad sindical. En estas circunstancias, el lugar de trabajo –o la calle– es a

menudo el hogar, y los problemas que afectan a la comunidad, la familia, la educación o la sanidad se convierten en algo inseparable de aquellos que afectan al trabajo (o a la falta de él).

Finalmente, otro rasgo destacable de estas alianzas es su relativa autonomía de los partidos políticos, incluidos de aquellos por los que seguramente votan sus afiliados y afiliadas. Esto es reflejo de la idea de que las luchas comunitarias siempre perdurarán más allá de la dinámica temporal de la política electoral. Se trata de una autonomía de perspectiva y de conocimiento, así como de organización, reforzada por los recursos independientes y la capacidad institucional de los sindicatos. Resulta revelador que el FNSA quedara prácticamente inactivo después de que muchos y muchas de sus dirigentes pasaran a ocupar cargos en el Gobierno de Lula, a pesar de que, como ya hemos señalado, las presiones para privatizar, sobre todo en el ámbito local y por parte de empresas brasileñas, no han cesado.

El potencial y los límites de los sindicatos

Los sindicatos siguen contando con amplias bases que pagan sus cuotas, lo cual supone un un potencial de alcance popular que no pueden igualar los partidos políticos en la actualidad. Solo la religión organizada y el fútbol siguen siendo serios competidores en este sentido.

Es cierto que algunas cuotas llegan de personas afiliadas que tienen un papel fundamentalmente pasivo y que pagan esa cuota a través de un sistema negociado por el sindicato con el empleador. Sin embargo, si el sindicato es de corte activista y actor directo en campañas, su potencial alcance popular es muy notable. Así, el sindicato puede convertirse en una fuente excepcional de conocimientos prácti-

cos y especializados, debido al papel dual de los trabajadores y las trabajadoras como parte de la ciudadanía y del funcionariado público, que se pueden utilizar como base para construir alternativas a la privatización.

Las bases del sindicato pueden ser también una fuente de poder de negociación, en cuya agenda se puede situar la calidad o la protección del suministro de servicios. Mediante las cuotas periódicas que proporcionan las afiliaciones, los sindicatos pueden ofrecer también una base material para desarrollar instituciones críticas en materia de educación, comunicación, investigación y otros recursos vitales para la movilización. Además, la estabilidad institucional, sumada

a los recursos materiales o físicos, puede permitir a los sindicatos convertirse en lo que Carmen Sosa, de la FFOSE, define como la 'espinas dorsal' de campañas formadas por fuerzas cívicas más precarias y dispersas.

Por otro lado, estos factores también entrañan cierto peligro. La longevidad institucional puede ser motivo de cautela, en caso de que la dirigencia del sindicato ponga la protección de su institución o la visión a corto plazo de los intereses de sus afiliados y afiliadas por encima de un enfoque más transformador, aunque quizá también más arriesgado.

Las personas que están a la cabeza de los sindicatos también están sujetas a los ciclos electorales, empezando desde las bases y como delegados y delegadas, y ascendiendo hasta la presidencia. Así, para mantenerse en el cargo (y podría también decirse que para poner en práctica su visión y programa), la persona, ya de sea de perfil más administrativo o activista, debe conservar a su 'electorado'. Por ese motivo, tienen que ser vistos como agentes eficaces a la hora de defender los derechos e intereses de los afiliados y las afiliadas. El quid de la cuestión está en identificar cuál es la mejor forma de defender dichos derechos e intereses. Los y las dirigentes con visión entenderán que la mejor vía para defender los derechos laborales es vincularlos con otros derechos, y que las luchas se deben basar en una estrategia basada en derechos. En los últimos años, a los derechos laborales, los de las mujeres y todos los demás se han empezado a sumar también los derechos de la naturaleza.

Del mismo modo, si bien los lazos con partidos políticos pueden permitir a los sindicatos ejercer cierto poder de negociación política para contrarrestar las presiones de elites privadas sobre esos partidos, también pueden dar lugar a la pasividad entre las bases sindicales una vez que ese partido llega al poder. Y es que se corre el riesgo de dar por sentado que la protección, la ampliación y la mejora de los servicios públicos pueden dejarse en manos del Gobierno.



Fuerte resistencia del público a la privatización en Nueva Zelanda.



Las afiliadas canadienses de la ISP lideran activamente campañas provinciales y nacionales para exigir sistemas de cuidado infantil públicos, asequibles y accesibles.

El debate sobre la relación de estas alianzas con la política conduce, de forma natural, a observar el impacto de la privatización en nuestro entorno político y cultura. La privatización, y todos los intentos por gestionar los servicios públicos como si fueran empresas privadas que deben generar un lucro y recuperar los costes en términos monetarios, vacía a la política democrática de toda decisión sobre los servicios públicos. Todo se convierte en una cuestión de balances. Los contables se convierten en el centro del poder. Los fines y las prioridades sociales se dejan de lado, como si fueran los restos inservibles de un tiempo pasado.

El agua, la tierra, la salud, la educación, el transporte, la asistencia social, los centros y la formación para jóvenes y todos los recursos y servicios de los que depende vivir bien se deberían organizar como un bien común, ya sea natural o social, al que se debe poder acceder y en que se debe poder participar como un de-

recho humano. El papel de los sindicatos y de las alianzas ciudadanas en la defensa de estos bienes comunes es importante porque, con ella, se da voz a una serie de convicciones subyacentes sobre los valores del servicio público que, de otro modo, tienen muy poca expresión política pública.

Cuando funcionan bien, estas ofrecen una plataforma para visibilizar contraargumentos que proporcionan la confianza y los términos para describir y reforzar el reconocimiento instintivo de que estos recursos naturales y servicios públicos esenciales no se deberían tratar como una mercancía.

Las campañas que presentamos aquí a favor de alternativas a la privatización llevan una serie de cuestiones –sobre propiedad, fondos, el carácter de la contratación, indicadores de eficiencia, etcétera– de un terreno que se dibuja como algo neutral, técnico y opaco –si no totalmente oculto por el velo de la confidencialidad comercial– hacia un mundo abierto,

aunque conflictivo, de valores, poder y debates sobre distintos objetivos e intereses. En este sentido, los sindicatos desempeñan un papel vital en un proceso de politización democrática de los medios para el suministro y la prestación de servicios.

Conclusión: caminos por recorrer

Ya se trate del Estado del postapartheid en Sudáfrica, del corrupto Estado griego, del jerárquico y paternalista Estado británico o de cualquier otro tipo de Estado de los muchos que hay, no estamos defendiendo los servicios públicos tal como eran en el pasado. En todos los casos de este cuaderno, el quid de la cuestión está en democratizar, abrir y mejorar la forma en que se organizan los servicios públicos y, en última instancia, el propio Estado: garantizando que se rinden cuentas, poniendo fin a la corrupción, adoptando métodos de gobierno participativo, asegurando la transparencia y creando medios por los que los conocimientos de todos y todas se usen para el beneficio colectivo. Estos son, al fin y al cabo, los grandes temas de las campañas que recogemos en estas páginas.

De hecho, uno de los motivos por el que las grandes empresas, en estrecha colaboración con los Gobiernos neoliberales, han llegado tan lejos con las privatizaciones es que el sector público, tal como lo hemos conocido hasta ahora, no era verdaderamente público. Salvo contadas excepciones, el público, a pesar de desear este tipo de servicios, no ha tenido ningún control sobre ellos, aunque se hayan gestionado y se gestionen aún en su nombre.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Grecia, donde la troika, en contra de todo sentido común y como si persiguiera destruir el país por completo, está insistiendo en seguir privatizando. Syriza, el partido que está encabezando la resistencia y que demuestra a diario que existen alternativas, tiene muy claro que no está defendiendo el Estado en su situación actual. En palabras de Aristides Baltas, coordinador del comité de Programa de Syriza: “Durante todas estas décadas, por no decir siglos, el Estado griego ha sido hostil al pueblo. Debemos abrir el Estado a las necesidades reales de las personas. Pediremos que se convoque una asamblea general de todas aquellas personas que trabajan en el Ministerio y explicaremos la nueva situación, y fomentaremos sus iniciativas para conseguir que el Estado responda a las necesidades de las personas”.

De esta forma, explica, esperan fomentar “un incremento en el número de personas que desean participar y generar ideas. Esta será la primera vez que suceda algo así en Grecia”. Esta es una estrategia ambiciosa para democratizar no solo un Estado institucionalmente corrupto, sino también para abrir el trabajo de los ministerios a la creatividad –hasta ahora sofocada– de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y al conjunto de la ciudadanía.

Por qué unos servicios públicos al servicio de las personas son importantes para una economía alternativa

Las historias de éxito en la reforma de los servicios públicos –cada vez más raras en esta época de implacable economía de la austeridad– no solo son relevantes para el argumento contra la privatización, sino que también son fundamentales para una estrategia de economía alternativa con la que contrarrestar la rápida caída hacia la depresión económica y la destrucción climática.

La reforma de los servicios públicos, encabezada desde la propia esfera pública y fundamentada en el tipo de principios y experiencias explorados en este cuaderno, sienta las bases para crear empleos nuevos y de utilidad en el sector público en general: en la construcción de vivienda pública y los servicios de asistencia, juventud, ambiente o informáticos, por citar algunos, fortaleciendo así la econo-

mía social. ¡No es que falten cosas por hacer!

Las depresiones llevan a la devastación social. Uno de los pilares para crear una nueva economía política, más humana, debe ser la expansión de un sector público reformado democráticamente. Afirmar la importancia de las alternativas democráticas a la privatización para construir una sociedad centrada en las personas, y no en el lucro, entraña cuestionar de forma radical las políticas de austeridad y el carácter no regulado e impulsado por los beneficios de las finanzas que las acompañan. Este poder desatado de las finanzas es fruto de lo que quizá se podría definir como ‘la privatización final’, en un momento en que las finanzas privadas y el poder político intentan acabar con todo lo público.

Del mismo modo que hemos presenciado luchas para defender el agua como un bien de propiedad y gestión pública, en una época en la que se han nacionalizado tantos bancos de todo el mundo, parece lógico que el próximo paso nos lleve a reivindicar que también las finanzas se organicen como un bien público, es decir, como un servicio público al servicio de las personas.



El dirigente sindical Baba Aye del Sindicato de Médicos y Trabajadores/as de la Salud de Nigeria (MHWUN) afiliado a la ISP, habla sobre la necesidad de abordar la desigualdad a través del financiamiento de los servicios públicos de calidad en el taller sobre “El Mundo Necesita Justicia Fiscal y un Impuesto sobre Transacciones Financieras”, durante el Foro Social Mundial en Túnez.

Un proceso dinámico

Una última reflexión. Todas las campañas que se analizan en este cuaderno forman parte de la construcción de una lucha global por unos servicios públicos que sirvan a las personas y que supone, inevitablemente, un proceso dinámico. También este cuaderno lo es, por lo que os pedimos que nos hagáis llegar vuestras experiencias. Ninguna campaña ha logrado alcanzar –ni puede pretender haberlo hecho– el modelo perfecto y definitivo, pero como ya hemos comentado, todas ellas pueden aportar importantes lecciones.

Puede que la lección más importante sea esta: en una época en que cada vez son más las personas descontentas con el sistema actual, y en que los programas de austeridad están impulsando una nueva ronda de privatizaciones y de empobrecimiento social, existe una alternativa. Cuando las políticas de desarrollo solo benefician a una pequeña minoría, las alternativas son un imperativo. Y cuando las personas se muestran reacias a resistir, suele ser porque no confían lo suficiente en esa alternativa.

Una alternativa no puede ser un programa abstracto; debe ser una iniciativa que exista realmente, sobre el terreno, de base y que se esté construyendo en estos momentos. Nuestra tarea consiste en salir y difundir esas experiencias y, con estos ejemplos, promover no solo la esperanza de un mundo mejor, sino el firme compromiso de construirlo aquí y ahora. No es necesario que esperemos a tener el modelo teórico perfecto; nuestras acciones deben ayudar a orientar a quienes escriben la teoría. Y es solo a través de la movilización en nuestras comunidades y en nuestros lugares de trabajo para buscar soluciones comunes con lo que crearemos nuevos modelos.

OTRAS LECTURAS

- Balanya, Brennan, Hoedeman, Kishimoto y Terhost (2008): *Por un modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños*
- Fattori, Tomasso (2012): *Public-Commons Partnership and the Commonification of that which is Public*
- Council of Europe Publishing n. 27 (2013): *Trends in Social Cohesion*
- Hall, Van Niekerk, Thomas y Nguyen (2013): *Renewable energy depends on the public not private sector*
- Lethbridge, Jane (2013): *Why the private sector kills more than it cures - Countering arguments in favour of privatisation*
- MacDonald y Ruiters (2012): *Alternativas a la privatización: La provisión de servicios públicos esenciales en los países del Sur*
- Hall, Lobina y Terhorst (2012): *Re-municipalisation in Europe*
- Hall, David (2012): *Corruption and public services*
- Hall, Lobina, Corral, Hoedeman, Terhorst, Pigeon y Kishimoto (2009): *Asociaciones público-públicas (PUP) para el suministro de agua*
- Trade Union Co-ordinating Group report (2013): *The Real Cost of Privatisation*
- Wainwright, Hilary (2012): 'Resistencia transformadora: el papel de los trabajadores y los sindicatos en las alternativas a la privatización', en *Alternativas a la privatización: La provisión de servicios públicos esenciales en los países del Sur*, editado por MacDonald y Ruiters
- Whitfield, Dexter (2010): *Global Auction of Public Assets: Public sector alternatives to the infrastructure market and Public Private Partnerships*, Spokesman Books, Nottingham
- Whitfield, Dexter (2012): *In Place of Austerity-Reconstructing the economy, state and public services*, Spokesman Books, Nottingham
- Wainwright y Little (2009): 'Public Service Reform... But Not As We Know It'

PÁGINAS WEB

- Centre for Labour Studies (Class): www.classonline.org.uk
- European Services Strategy Unit: www.european-services-strategy.org.uk
- Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP): www.epsu.org
- Internacional de Servicios Públicos: www.world-psi.org
- Movimiento Europeo del Agua: <http://europeanwater.org>
- Municipal Services Project: www.municipalservicesproject.org
- Red Reclaiming Public Water: www.tni.org/network/reclaiming-public-water-net
- Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos: www.psiru.org
- Trade Union Co-ordinating Group: www.tucg.org.uk
- Transnational Institute: www.tni.org
- TNI: Por un modelo público de agua – Triunfos, luchas y sueños: www.tni.org/es/archives/books_publicwater-s
- Water Justice (centro de recursos sobre alternativas a la privatización): www.waterjustice.org
- We Own It: weownit.org.uk

Agradecimientos

Este cuaderno, como casi todos los procesos de producción, ha contado con la participación de muchísimas personas. La gran mayoría de ellas aparecen citadas en el texto, pero entre las otras, que me han ayudado con la investigación, me han acogido, han leído e ido comentando el manuscrito a medida que este iba tomando forma, me han servido de inspiración o me han animado y apoyado, están Sergio Baerlie, Jane Barrett, Marco Berlinguer, Huw Beynon, Roy Bhaskar, David Boys, Nick Buxton, Brid Brennan, Michael Calderbank, Daniel Chavez, Derek Clarke, Evelina Dagnino, Fiona Dove, Steve Faulkner, Sam Gindin, Leonard Gentle, Patrick Kane, Carmen Ludwig, David MacDonald, Doreen Massey, John Mawbey, Robin Murray, Kevan Nelson, Sheila Rowbotham, Greg Ruiters, John Saul, Mark Serwotka, Jane Shallice, Anne Slater y Pietje Vervest. Me gustaría también dar las gracias a Jean-Pierre Dauly, que ha diseñado estas páginas, y a Tom Walker, que ha revisado el texto en inglés.

Dedico este cuaderno a la memoria de mi madre, Joyce Wainwright, con cuyo teléfono hice gran parte de la investigación inicial y que no dejaba de preguntarme por lo que estaba escribiendo y de retarme a que no fuera nada ajeno a las necesidades y las luchas reales de las personas.



En el referendo nacional de Italia, la abrumadora mayoría de las y los ciudadanos indicaron que estaban a favor de guardar los servicios de agua en manos públicas, pero la lucha contra la privatización continúa.



Internacional de Servicios Públicos

45, avenue Voltaire, BP 9
01211 Ferney-Voltaire Cedex
France

Tel: +33 (0) 450 40 64 64
Fax: +33 (0) 450 40 73 20
Email: psi@world-psi.org



Transnational Institute

PO Box 14656
1001 LD Amsterdam
The Netherlands

Visiting address
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
The Netherlands

Tel: + 31 20 662 66 08
Fax: + 31 20 675 71 76
Email: tni@tni.org